



acceso 360



04/12/2020

Resumen de prensa del IEF

Instituto de la  Empresa Familiar

REBOLD

EMPRESA FAMILIAR

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
04/12/20	GARANTIZAR A LA EMPRESA FAMILIAR QUE SE CONSOLIDE ES EL OBJETIVO DE LA XUNTA / El Correo Gallego	5	1
04/12/20	LA ABEF RECLAMA PLANES DE URGENCIA PARA EVITAR EL CIERRE DE EMPRESAS Y LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS / Última Hora -El Económico	6	1
04/12/20	«LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN SON LA PIEDRA ANGULAR DE NUESTRO ÉXITO» / Última Hora	7	1

FISCALIDAD

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
04/12/20	IRPF, AHORRO, IVA, PLANES DE PENSIONES... ASÍ ES EL HACHAZO FISCAL QUE VIENE / Expansión	9	1

ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
04/12/20	LA JUNTA DE CAIXABANK APRUEBA ABSORBER BANKIA Y CREAR EL MAYOR BANCO ESPAÑOL / Cinco Días	11	1
04/12/20	EL CONGRESO AVALA POR MAYORÍA EL PRESUPUESTO TRAS REBAJAR SU RECAUDACIÓN EN 3.000 MILLONES / Cinco Días	12	1
04/12/20	EL GOBIERNO Y LA GRAN EMPRESA EXPLORAN CÓMO ATERRIZAR LA FP DUAL EN ESPAÑA / Cinco Días	13	1
04/12/20	RIBERA PINCHA LA BURBUJA RENOVABLE Y DEVUELVE 1.572 MILLONES EN AVALES / El Economista	14	1
04/12/20	CEOE PLANTEA AL ESTADO UN AJUSTE DE 50.000 MILLONES / El Economista	15	1
04/12/20	PRESUPUESTOS Y 'JAPONIZACIÓN' ECONÓMICA / El Economista	16	1
04/12/20	LA OPOSICIÓN 'INFLA' EN 3.000 MILLONES LOS PRESUPUESTOS AL APOYAR A LOS CATALANES / El Economista	17	1
04/12/20	LA AIREF PREVÉ UN ALZA DEL DÉFICIT AUTONÓMICO AL 0,8% EN 2021 Y MÁS DESAJUSTES DESDE 2022 / El Economista	18	1
04/12/20	EL ACUERDO DE LA UE Y LONDRES SOBRE EL 'BREXIT', AÚN MÁS LEJOS / El Economista	19	1
04/12/20	EL INGRESO MÍNIMO VUELVE AL TALLER / El Mundo	20	1

ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
04/12/20	LA PRESIÓN FISCAL EN LA OCDE SE REDUJO ANTES DEL CORONAVIRUS POR PRIMERA VEZ DESDE 2009 / El País	21	1
04/12/20	LAS CONSTRUCTORAS PLANTEAN UN MACROPLÁN CON LOS FONDOS EUROPEOS / El Periódico de Catalunya	22	1
04/12/20	LAS CCAA DEBERÁN DEVOLVER 5.000 MILLONES AL ESTADO EN 2022 / Expansión	23	1
04/12/20	SÁNCHEZ CONSOLIDA EL 'CLUB FRANKENSTEIN' Y SE GARANTIZA TRES AÑOS MÁS EN MONCLOA / Expansión	24	2
04/12/20	EL GOBIERNO ESTUDIA AHORA UNA JORNADA DE 32 HORAS SEMANALES / La Razón	26	2
04/12/20	LAS AUTONOMÍAS DEBERÁN DEVOLVER 5.000 MILLONES AL ESTADO EN EL 2022 / La Vanguardia	28	1
04/12/20	LA OPEP PACTA UNA SUBIDA MODESTA DE LA PRODUCCIÓN / La Vanguardia	29	1



acceso 360

EMPRESA FAMILIAR





Garantizar a la empresa familiar que se consolide es el objetivo de la Xunta

IMPULSO. La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, aboga por garantizar la consolidación de las empresas y destaca la contribución de las familiares al empleo y la riqueza de la comunidad. Lo hizo tras

reunirse con representantes de la Asociación Galega da Empresa Familiar (AGEF), integrada por 57 compañías que generan 55.000 puestos de trabajo, y señaló que resulta fundamental trabajar en la creación de nuevas

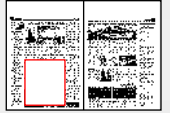
empresas, pero, en mayor medida, en favorecer la consolidación de las existentes.

Además, Lorenzana abordó futuras colaboraciones con AGEF y aseguró que la Xunta entiende las consecuencias de la pandemia en estas empresas, que representan el 92% del tejido productivo gallego. Por ello afirmó que el apoyo a las creadas y que buscan permanecer en la comunidad representa una prioridad.



La conselleira reunida con miembros de la AGEF. Foto: X.G.

Asimismo, la titular autonómica de Emprego trasladó que el Plan de rescate a personas trabajadoras autónomas, microempresas y el sector de la hostelería cerrado por las medidas sanitarias cuenta con un presupuesto de 84 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es el de apoyar a las pymes y micropymes que soportan un gran tejido social, como ocurre con las empresas familiares. **E.P.**



La ABEF reclama planes de urgencia para evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleos

El jueves 26 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General de socios de la Associació Balear de l'Empresa Familiar, celebrada por primera vez de forma telemática y presencial en la Cámara de Comercio de Mallorca. La reunión congregó a 90 asistentes y contó con la intervención del economista y exministro de Industria y Energía y de Economía y Hacienda en gobiernos de Felipe González, Carlos Solchaga, en una conferencia moderada por Paula Serra, editora de *El Económico*. Solchaga se mostró partidario de la expansión fiscal: "El Estado debe gastar todo y más", indicó, y propuso fórmulas público-privadas para



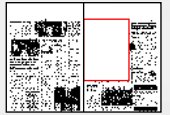
que los fondos europeos se puedan distribuir rápido.

Esther Vidal, presidenta de la ABEF, reclamó planes de urgencia para evitar el cierre de empresas familiares y la destrucción de empleos. Asimismo, consideró esencial que se man-

tengan los ERTE y se flexibilicen los ICO hasta que se consolide la salida sanitaria de la actual pandemia.

En el último año, la ABEF ha incorporado tres empresas familiares, Adalmo, Potencia y Garden Hotels.





Carmen Sampol, Rafael Crespi y Rafael Ferragut, ayer, en su intervención en la XIII Jornada Cátedra Banca March que tuvo lugar por videoconferencia.

«La internacionalización y la innovación son la piedra angular de nuestro éxito»

► **Carmen Sampol**, CEO de Sampol, en la Jornada Cátedra Banca March de la Empresa Familiar

Ruiz Collado | PALMA

«La internacionalización y la innovación son la piedra angular de nuestro éxito, así como ser líderes en sostenibilidad, eficiencia energética y digitalización», señaló ayer la CEO del grupo Sampol, Carmen Sampol, en el transcurso de la XIII Jornada Cátedra Banca March de la Empresa Familiar.

Sampol añadió que «miramos al futuro con mucha ilusión y comprometidos con el medio ambiente». En este punto puntualizó que su grupo «realiza un uso inteligente de la energía basándonos en la cogeneración como energía más eficiente y combinándola con energías renovables como fotovoltaica, biosama, biogás, baterías eléctricas, geotermia y ahora con la incorporación del hidrógeno».

La presentación del acto, que se realizó por videoconferencia, corrió a cargo de Rafael Crespi,



«Las empresas familiares son el motor incuestionable de las economías balear, nacional y europea»

José Luis Acea
CEO DE BANCA MARCH

«La caída de ingresos por la pandemia va a generar problemas de solvencia al 14,5 % de empresas baleares»

Rafael Crespi
DIRECTOR CATEDRA BANCA MARCH

«Ofrecemos estructuras alternativas y complementarias de financiación a las empresas»

Rafael Ferragut
DIRECTOR TURISMO DE BANCA MARCH

director de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar; Esther Vidal, presidenta de la Asociación Balear de l'Empresa Familiar (ABEF); Llorenç Huguet, rector de la UIB; y José Luis Acea, CEO de Banca March.

José Luis Acea recordó los orígenes de la entidad balear y su condición de banco familiar con un miembro de la cuarta generación a la cabeza del proyecto. Asimismo, destacó los esfuerzos de las empresas familiares, «el motor incuestionable de las economías balear, nacional y europea», por seguir aportando valor y prosperidad a la sociedad, así como la necesidad de tender puentes entre universidad y empresa.

Resaltó la apuesta de la entidad por la empresa familiar, de ahí la creación de la Cátedra Banca March «por nuestro compromiso con Balears, con la sociedad en general y con el futuro»

Crespi presentó los resultados preliminares de un 'stress test' a las empresas de Balears ante el impacto de la pandemia. «Las pruebas de resistencia practicadas ante la bajada de ingresos sobre los niveles de liquidez y solvencia se estiman de forma diferente para cada subsector de la economía. Los resultados del modelo predicen problemas de solvencia económica para un 14,5 % de las empresas y de liquidez para un 24 %». Según el estudio, estos impactos son más acentuados para las empresas de menor tamaño, «siendo las diferencias entre empresas familiares y no familiares poco significativas», indicó.

Rafael Ferragut abordó las diferentes alternativas de financiación para la empresa familiar: «Desde Banca March, llevamos tiempo trabajando en ofrecer a nuestros clientes estructuras alternativas y complementarias de financiación, que les permitan diversificar no sólo en el número y tipología de los financiadores, sino también en las estructuras».





acceso 360

FISCALIDAD





EL CONGRESO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

IRPF, Ahorro, IVA, planes de pensiones... Así es el hachazo fiscal que viene

8.000 MILLONES / Los Presupuestos contienen una catarata de subidas fiscales que afectan al IRPF, planes de pensiones, Sociedades, IVA y Patrimonio, que se acompañan de las 'tasas Google' y 'Tobin' y nuevos impuestos a plásticos y residuos.

Mercedes Serraller. Madrid
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 por parte del Congreso supone el pistoletazo de salida a una catarata de subidas de impuestos de cerca de 8.000 millones de euros que afectan al IRPF, a Sociedades, al IVA y a Patrimonio. El paquete fiscal se acompaña de la creación de nuevos impuestos que irán en otras leyes, como las *tasas Google* y *Tobin*, el de plásticos y el de residuos. Las subidas afectan a los principales impuestos, y también impactaban en el de Hidrocarburos, aunque finalmente la subida del diésel para equipararlo a la gasolina se ha caído en la negociación de enmiendas con el PNV. Pero las alzas fiscales no acaban aquí. Ya ha entrado en el Congreso la Ley de Lucha contra el Fraude, que contiene varias alzas fiscales por valor de 828 millones, y se realiza una subida de Patrimonio que anticipa la que se hará, junto con Sucesiones y Donaciones, en la reforma de la financiación autonómica. Hacienda preveía recaudar 6.085 millones en 2021 y 2.185 en 2022 con todas estas subidas, un total de 8.270 millones. Sin el diésel, el objetivo se queda en 5.635 millones en 2021 y 2.135 en 2022, un total de 7.770 millones.

lones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA), un total de 8,5 millones que se van a ver afectados. Impactará a los más de 3,2 millones de autónomos y a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

- **Sociedades.** En el Impuesto sobre Sociedades se grava el 5% los dividendos procedentes del exterior y los nacionales con el objetivo de recaudar 1.520 millones.
- **IVA.** Sube el IVA a bebidas azucaradas del 10% al 21%.
- **Primas de seguros.** Se eleva el impuesto a las primas de

seguros del 6% al 8%.
• **Envases de plástico.** El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables que se va a crear ya fue sometido a consulta pública y tiene como objetivo reducir el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado para reducir así su consumo. Hacienda prevé que re-

caude 491 millones de euros en 2021.
• **Residuos.** El Gobierno implantará un impuesto estatal sobre residuos que penalice las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración. Ya tienen impuestos de este tipo algunas comunidades, con lo que ahora el

Estado se reservaría el hecho imponible y los tributos regionales decaerían. Hacienda estima un impacto recaudatorio de 861 millones en 2021.
• **Patrimonio.** En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, la imposición se eleva un punto, del 2,5% al 3,5%, para patrimonios desde 10 millones de euros. A cambio de su apoyo a los Presupuestos, el Gobierno ha pactado con ERC crear una comisión bilateral para obligar a subir a la Comunidad de Madrid Patrimonio y Sucesiones, lo que se hará en la reforma de la financiación autonómica.

• **Socimi.** La Ley de Lucha contra el Fraude llevará una subida a las Socimi. Se grava un 15% los beneficios no distribuidos de estas sociedades.

• **Sicav.** El control de las Sicav pasa a la Agencia Tributaria de la CNMV y se eleva la participación mínima de minoritarios a 2.500 euros.

• **Inmuebles.** Sube la tributación de inmuebles en Patrimonio, Sucesiones e ITP, que pasan a valorarse por valor de mercado.

• **Efectivo.** El límite para operar en efectivo se reduce de 2.500 euros a 1.000 euros.

• **Lista de morosos.** El tope para entrar en la lista de morosos baja de 1 millón a 600.000 euros y se incluirá a administradores y directivos.

• **'Unit linked'.** También está previsto un golpe a los seguros *unit linked*, que tributarán en Patrimonio.

• **'Tasa Google'.** Las *tasas Google* y *Tobin*, ya aprobadas, entran en vigor el 16 de enero. La *tasa Google* grava un 3% la venta de datos, la publicidad y la intermediación digital y prevé recaudar 968 millones.

• **'Tasa Tobin'.** Grava un 0,2% la compra de acciones de cotizadas españolas con una capitalización de más de 1.000 millones para recaudar 850 millones.



La subida del IRPF costará 6.210 euros al año de media a 16.000 contribuyentes

M.S. Madrid
La subida del IRPF costará 6.210 euros al año de media a 16.000 contribuyentes. Es el cálculo que ha realizado el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) para EXPANSIÓN de lo que supone el alza de dos puntos para rentas desde 300.000 euros que llevan los Presupuestos de 2021. Junto con el incremento que afecta a las rentas del ahorro, impactará en un total de 33.568 contribuyentes, el 0,16% de los declarantes de este impuesto, que pagarán 13.337 euros más de media de cuota al año. El alza del ahorro, de tres

puntos desde 200.000 euros, supondrá 19.746 euros al año de media para 17.675 contribuyentes. Estos datos se han estimado a partir de las estadísticas del IRPF de 2018 y del análisis estadístico de 2017, con el criterio del devengo. Es posible que las cifras estimadas por Gestha sean entre un 7% y un 9% inferiores a la previsión gubernamental de 36.194 contribuyentes afectados y 490 millones, produciéndose una mayor diferencia en la base liquidable general que en la base liquidable del ahorro. No obstante, tanto esta pre-

visión, como la gubernamental, están ajustadas a un escenario anualizado en un año convencional, por lo que las personas afectadas y la recaudación será menor en estos años que dure la crisis del Covid-19. Hacienda ha estimado que la subida de las rentas del trabajo y del ahorro recaudarán 144 millones de euros en 2021 y 346 millones en 2022, un to-

tal de 490 millones. A esto hay que añadir el golpe a los planes de pensiones, en los que el límite de aportaciones máximas a planes individuales baja de 8.000 euros a 2.000 euros, para lo que el Fisco ha calculado una recaudación de 580 millones en 2022. De esta forma, la previsión de lo que suponen todas las alzas del IRPF alcanza los 1.070 millones entre 2021 y 2022. En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados, un total de 8,5 millones de afectados.

El alza del ahorro supondrá 19.746 euros al año de media para 17.675 contribuyentes

- **IRPF.** El tipo impositivo sube dos puntos para las rentas a partir de 300.000 euros. Junto con la del ahorro, la medida afectará a 33.568 contribuyentes (ver información adjunta).
- **Ahorro.** El tipo impositivo sobre las rentas del ahorro se elevan tres puntos, hasta el 27%, a partir de ganancias de 200.000 euros.
- **Planes de pensiones.** También en el IRPF, el límite de aportaciones a planes de pensiones baja de 8.000 euros a 2.000 euros, mientras que el límite conjunto con la empresa se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros. Con esta medida el Gobierno prevé un ahorro de 580 millones en 2022. En España hay más de 7,5 mi-



acceso 360

ECONOMÍA





Nuevo mapa bancario

La junta de CaixaBank aprueba absorber Bankia y crear el mayor banco español

Gortázar: la rentabilidad mejorará dos puntos en 2022 tras la integración

Las autorizaciones estarán ya en marzo

ANGELES GONZALO
MADRID

Ya es una realidad. El 70% del capital de CaixaBank aprobó ayer la fusión de la entidad con Bankia (el 30% optó por no acudir ni ceder la representación de sus votos) en una junta extraordinaria que, como sucedió el martes en el caso de la firma que preside José Ignacio Goirigolzarri, los protagonistas de las intervenciones que se produjeron en el turno de preguntas de los accionistas correspondieron a representantes sindicales que reclamaban acuerdos de despidos pactados y voluntarios. También se quejaron de la destrucción de empleo.

En el caso de Bankia, que reunió a sus accionistas dos días antes, el porcentaje del capital que apoyó la fusión con sus votos fue del 80% (hay que tener en cuenta que el FROB controla el 62% del capital). Tras estas aprobaciones se creará el banco más grande de España, y también uno de los primeros de Europa, con unos activos de más de 660.000 millones y más de 20 millones de clientes. Es la mayor fusión producida en los últimos 20 años en el país. El nuevo banco, no obstante, necesita aún una serie de autorizaciones para que Bankia desaparezca jurídicamente y se inicien los cambios de rótulos en las oficinas de la entidad que preside Goirigolzarri para pasar a denominarse también CaixaBank.

Quedan pendientes las autorizaciones de Competencia, la CNMV, la Dirección General de Seguros, el BCE, el Banco de España y del Ministerio de Economía. Una vez resueltas, se registrará la nueva entidad en el Registro Mercantil con la extinción jurídica de Bankia, que dejará de existir. Estos trámites se espera que estén resueltos entre febrero y marzo.



Será entonces cuando el nuevo banco comience a negociar con los sindicatos el número de empleados salientes, el cierre de oficinas y las condiciones del ERE, que se estima que afectará a entre 7.000 y 8.000 empleados. Mientras que el cerrojo de sucursales sumará unos 1.500.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quien mantendrá su cargo tras la fusión, respondió a los sindicatos en la junta de accionistas: "Nos dejaremos la piel" para llegar a un acuerdo con la plantilla. Y aseguró que la fusión permitirá "asegurar la sostenibilidad de miles de puestos de trabajo" que peligrarían si la entidad continuara en solitario. "Si no hacemos cosas pondríamos en peligro la sostenibilidad de todos los puestos de trabajo", alertó.

Antes, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, quien dejará su cargo una vez sea efectiva la fusión, destacó que la propuesta de fusión

sometida a aprobación es uno de los grandes hitos en la historia de la entidad, algo que también recaló el consejero delegado. "Tanto La Caixa como CaixaBank tienen una larga historia de integraciones [la de Bankia será la número 85] y estoy seguro de que se convertirá en un hito histórico cuando, con la perspectiva de los años, constatemos el éxito de la operación", declaró. Para añadir que "Bankia es el mejor socio para acompañarnos en este viaje y la fusión dará lugar a una entidad más sólida, más eficiente y más rentable".

Ahorro de costes

Gortázar explicó que la fusión aportará ahorros de costes y también ofrece lo que considera elevadas sinergias de ingresos. Así, sobre los ahorros de costes, estos se generarían tanto por racionalización de gastos generales como por la posibilidad de operar la entidad resultante con una

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual (derecha), y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ayer, en la junta de accionistas de CaixaBank. EFE

"Nos dejaremos la piel" para llegar a un acuerdo con la plantilla en el ajuste a realizar

El 70% del capital del banco catalán avala la operación y el 80% en el caso de Bankia

estructura menor a la suma de las dos entidades. Dichos ahorros se estiman en unos 770 millones de euros.

Los mayores ingresos se darán en productos y servicios asociados al negocio asegurador y especialmente en el ahorro a largo plazo. "Gracias a la consecución de las sinergias anunciadas, estimamos que en el año 2022 el RoTE [rentabilidad del patrimonio tangible] mejoraría entre uno y dos puntos porcentuales respecto a permanecer en solitario", explicó Gortázar.

Para el ejecutivo "esta operación es una gran oportunidad de crear valor no solo para los accionistas de ambas entidades, sino también para el conjunto de la sociedad". Tras la pregunta de un accionista, Gortázar respondió que ahora no hay peligro de un oligopolio bancario. "La competencia es muy importante en España, por eso la rentabilidad del sector es muy baja y no cubre el coste de capital", dijo.

Anticiparse a la ola de fusiones

► **Agradecimiento a Fainé.** El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, celebró ayer su última junta en el cargo, ya que una vez que se cree la nueva CaixaBank él dejará su puesto. Ayer agradeció el trabajo de los consejeros que le han acompañado durante los últimos años, en especial a Gonzalo Gortázar. "Es un referente y gran ejemplo para toda la organización", dijo. Y mencionó "de manera muy especial" a Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa (con el 40% del capital de CaixaBank, que tras la fusión pasará a tener el 30%) y uno de los promotores de la fusión.

► **Ola de fusiones.** Gual recordó que las autoridades supervisoras han llamado reiteradas veces a la concentración bancaria en Europa para ganar escala y mejorar la eficiencia, y CaixaBank se ha querido anticipar a esta ola de reestructuración, teniendo "un papel protagonista en este nuevo diseño", declaró ayer.

► **Competencia.** Tras esta fusión quedarán en España 11 grandes entidades supervisadas por el BCE, el mismo número que en Italia o Francia, recaló Gonzalo Gortázar. Hay, además, 15 bancos que han entrado en el mercado español, gran parte de ellos digitales, además de más de 350 fintech.



Cuentas públicas El Estado

El Congreso avala por mayoría el Presupuesto tras rebajar su recaudación en 3.000 millones

La negociación con los grupos deja el proyecto sin alzas de diésel e IVA

El plan logra 188 votos a favor y es enviado al Senado para su ratificación

JUANDE PORTILLO
MADRID

España se prepara para estrenar nuevos Presupuestos Generales del Estado por primera vez desde 2018. El Congreso de los Diputados dio ayer un amplio apoyo mayoritario al proyecto del Gobierno, que será remitido ahora al Senado para su aprobación definitiva en el plazo de un mes permitiendo que las cuentas públicas entren en vigor en los primeros días de 2021 y facilitando al Ejecutivo de coalición agotar la legislatura pese a su minoría parlamentaria. Por el camino, en todo caso, la tramitación de las cuentas ha llevado a Hacienda a reducir en unos 3.000 millones de euros sus previsiones de recaudación.

Así, el plan presupuestario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, planteaba una reforma tributaria que elevaría los ingresos públicos en 9.170 millones, a ingresar entre 2021 y 2022. El plan incluía un alza de la imposición indirecta de 1.724 millones que Hacienda rebajó a 757 millones en la negociación con los grupos antes de presentarlo al Congreso. Fuentes oficiales revelan que se debió a la renuncia a subir el IVA de la educación y la sanidad privadas pactada con el PNV.

A partir de ahí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incentivó el apoyo a las cuentas anunciando en el Parlamento la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas al 0%, medida que días antes se había tasado en una pérdida de recaudación anual de 1.568 millones ante una solicitud de Cs en este sentido. Aunque Montero estimó luego que la medida solo costaría entre 350 y 850 millones, teniendo en cuenta que las vacunas reducirían el uso de

Evolución de la reforma fiscal de los Presupuestos Generales para 2021

En millones de euros

PLAN PRESUPUESTARIO	RECAUDACIÓN ESTIMADA PARA 2021-2022			DIFERENCIA ENTRE LA INICIAL Y LA FINAL	
	Comunicada a Bruselas	Presentada al Congreso	Aprobada por el Congreso		
Creación de nuevos tributos	2.709	2.709	2.709		
Creación de la tasa Tobin	850	850	850		
Creación de la tasa Google	968	968	968		
Creación del impuesto sobre envases de plástico	491	491	491		
Alza del 10% al 21% en IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas*	400	400	400		
Medidas de fiscalidad verde	1.361	1.361	861		-500
Reducción de la bonificación fiscal del diésel		500	0		
Fiscalidad verde (impuesto sobre residuos)		861	861		
Medidas de imposición directa	2.548	2.615	2.615		
Rebaja al 95% de la exención de dividendos en Sociedades		1.520	1.520		
Alza de 2 puntos en el IRPF para rentas de más de 300.000 € y de 3 puntos en la del ahorro desde 200.000 €		490	490		
Rebaja de 8.000 a 2.000 en el límite de las reducciones en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones		580	580		67
Prórroga límites estimación objetiva (módulos) del IRPF e IVA		0	0		
Tipo mínimo del 15% en Sociedades para socimis		25	25		
Subida de 1 punto en Patrimonio desde 10 millones y recuperación del impuesto como indefinido**		0	0		
Medidas de imposición indirecta	1.724	757	757		-967
Incremento del 6% al 8% en el tipo sobre primas de seguros		507	507		
Otras medidas		250	250		
Ley contra el fraude fiscal	828	828	828		
Limitación de pagos en efectivo	218	218	218		
Refuerzo de la lista de morosos	110	110	110		
Mejora de la prevención y lucha contra el fraude fiscal	500	500	500		
REFORMA TRIBUTARIA INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO	9.170	8.270	7.770		-1.400
Rebaja al 0% del IVA de las mascarillas quirúrgicas***	0	0	-1.568		-1.568
IMPACTO TOTAL DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS****	9.170	8.270	6.202		-2.968

(*) Se verá reducida pero está por ver en cuánto. (**) Las CC AA ingresarían hasta 339 millones si todas lo aplicaran. (***) Recaudación para un solo año.

(****) El impacto superaría los 3.000 millones una vez descontados los lácteos de la subida de IVA a bebidas azucaradas

Fuentes: Ministerio de Hacienda, Gobierno de España y elaboración propia

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

mascarillas en 2021, está por ver para cuándo dejan de ser un bien de uso obligatorio en espacios públicos.

Durante la negociación, Hacienda se avino también a retirar la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, que hubiera elevado los ingresos públicos en 500 millones, para atar el apoyo del PNV.

Estas concesiones restan 2.968 millones a la recaudación inicialmente estimada. A esa cifra habría que añadirle el efecto de eximir a los productos lácteos, como batidos, del alza del IVA, del 10% al 21%, a las bebidas azucaradas que JxCat y ERC lograron imponer, contra el criterio del Gobierno y gracias al inusitado apoyo conjunto de PP, Vox, Cs y EH

Bildu, entre las últimas enmiendas. Hacienda asevera que aún no ha cuantificado su impacto en recaudación pero dado que la medida integral preveía aportar 400 millones al fisco, es de esperar que con el cambio la rebaja total de ingresos frente al plan inicial supere los 3.000 millones.

Como resultado, la reforma fiscal reduce los ingresos presupuestados a 7.770 millones lo que, unido a la pérdida del IVA de las mascarillas, deja el impacto tributario de las cuentas en un alza de 6.202 millones.

Apoyo de 11 grupos

Estas concesiones, así como estimables compromisos de incremento de la inversión

en determinados territorios, son los que cimentaron la victoria lograda ayer por el Gobierno. Su proyecto contó con el voto favorable de 188 diputados de 11 grupos diferentes (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro, que suman 189 representantes). Las modificaciones aprobadas obligan a Hacienda a rehacer parcialmente el plan de gastos e ingresos.

A su vez, votaron en contra 154 diputados de los 161 del bloque que no apoya el Presupuesto, compuesto por PP, Vox, UPN, Foro, Cs Junts per Catalunya, la CUP, Coalición Canaria y BNG. Algu-

nos lo hicieron por oposición frontal a los planteamientos del Gobierno, como los populares o Vox, otros, por no lograr las concesiones exigidas, como BNG, y otros por los acuerdos alcanzados con EH Bildu y ERC, como Cs.

El proyecto pasa ahora a manos del Senado, que tiene un mes para ratificarlo en los mismos términos o para devolverlo al Congreso de los Diputados con las modificaciones que se consideren oportunas, a fin de que la Cámara Baja los ratifique, aceptando o no los cambios, por mayoría simple. Es de prever, por tanto, que las cuentas tengan el visto bueno definitivo a finales de este ejercicio, lo que permitiría tenerlas vigentes el 1 de ene-

ro, o en los primeros días del nuevo año, lo que obligaría a prorrogar momentáneamente las cuentas vigentes hasta que los Presupuestos de 2021 figuren en el BOE.

En cualquiera de los casos, serán las primeras cuentas en sustituir a las diseñadas por el exministro del PP Cristóbal Montoro para 2018, que han ido siendo prorrogadas ante la falta de acuerdo político para aprobar otras.

Se tratan de las cuentas más expansivas de la historia, al incorporar los fondos europeos, y serán el marco bajo el que España tratará de afrontar la recuperación de las crisis del Covid-19 en 2021 y en los años siguientes si el Ejecutivo pierde apoyos y opta por prorrogarlas.



El Gobierno y la gran empresa exploran cómo aterrizar la FP dual en España

P. SEMPERE
MADRID

El plan presentado en julio por el Gobierno para dar un empujón a la Formación Profesional (FP) en España, y que prevé la movilización de 1.900 millones de euros en tres años, sigue rodando. Por ahora, el Ejecutivo estudia cómo aterrizar la FP dual, modalidad que aúna la formación en el centro educativo y las prácticas en la empresa, en España. Para ello, la ministra de Edu-

cación y FP Isabel Celaá, se reunió ayer con las principales organizaciones y líderes empresariales del país para dar "un impulso sin precedentes" a la FP dual, recogía el ministerio en una nota.

Al encuentro asistieron el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva; el presidente de la comisión de Educación y

Formación de la CEOE, José Antonio Sarría; el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José López-Tafall. También acudieron el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría; el consejero delegado de Siemens y de Siemens Ga-

mesa, Miguel Ángel López, y el presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez.

"Necesitamos una transformación de calado que se convierta en palanca de

El Ejecutivo quiere crear un ecosistema con alumnado, profesores y organizaciones

crecimiento y mejora de la productividad, es una herramienta imprescindible para el desarrollo de las competencias de los trabajadores del siglo XXI", subrayó la ministra tras el encuentro, al que seguirá en las próximas semanas otro con los principales representantes sindicales del país.

La modalidad dual se sitúa en torno al 3% de la oferta total de FP en España y "la corresponsabilidad y la acción conjunta son imprescindibles para conse-

guir unos objetivos que son comunes", destacó.

Entre las actuaciones que incluye el plan del Ejecutivo destaca la creación de "un ecosistema de FP" centrado en la dual, que incorpore a las empresas de cada sector, incluidas pymes y micropymes, y que permita su conexión con el profesorado, alumnado y redes de centros, uno de los temas tratados ayer con los representantes de la gran empresa para conocer sus impresiones.



Ribera pincha la burbuja renovable y devuelve 1.572 millones en avales

Las solicitudes para nuevas centrales verdes triplicaban las necesidades de la próxima década

Las empresas renuncian al 33% de los derechos de acceso a la red, por un total de 39,3 GW

Tomás Díaz MADRID.

Teresa Ribera pincha la burbuja de los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas para nuevas plantas renovables: los promotores se han acogido a la *amnistía* aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio y han renunciado a seguir adelante con proyectos que suman un total de 39,3 GW, un tercio de las peticiones gestionadas por Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico. Tras la renuncia, las empresas podrán recuperar las garantías financieras presentadas al solicitar los derechos, que se elevan a 1.572 millones de euros.

La página web de REE señala que a 31 de octubre había 121,7 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos –las plantas tienen reservado un sitio en una subestación concreta–, más otros 47,6 GW con los permisos en tramitación. Ese volumen casi triplica las necesidades del país durante la próxima década, en la que debe sumar unos 60 GW.

Esa desproporción revela una tremenda burbuja –hay que tener en cuenta que REE ha rechazado otros 114,1 GW por inviabilidades–, en la que no pocos de los promotores únicamente quieren especular con los permisos. Aunque un proyecto maduro, con la tramitación concluida y listo para construir, puede alcanzar un precio de 200.000 euros por MW, en el mercado de reventa se están pidiendo de 30.000 a 40.000 euros por MW únicamente por los derechos de acceso y conexión a la red, que son los primeros papeles del proceso de tramitación.

Garantías de 40.000 euros

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en octubre de 2018, al poco de anunciar sus ambiciosos planes en materia de energías renovables y tratando de frenar la velocidad del crecimiento de peticiones para acceder a las redes eléctricas –en aquel momento la burbuja no llegaba a los 35 GW–, multiplicó por cuatro el importe de las garantías exigidas para solicitar los derechos de acceso y conexión hasta los 40.000 euros por MW. La medida no tuvo éxito y el pasado mes de junio las peticiones de acceso, sin incluir las de conexión, llegaron a sumar 430 GW.



Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una sesión de control del Senado. EFE

Para pinchar la burbuja, la Cartera dirigida por Teresa Ribera promulgó este mes el Real Decreto-ley 23/2020, que revisa el procedimiento de tramitación de las futuras centrales –deben culminarse en un plazo de cinco caños, cumpliendo hitos concretos– y otorga la posibilidad de que los proyectos que no puedan cumplir esas estrictas condiciones, por la razón que sea, renuncien a sus derechos antes del pasado 25 de septiembre, recuperando los avales, gracias a una suerte de *amnistía*.

Pues bien, el Miteco informa a *elEconomista* de que la potencia a esa fecha había renunciado a sus derechos de acceso, tanto concedidos como en tramitación, asciende a 39,3 GW, lo que se traduce en la devolución de 1.572 millones en avales.

La cantidad de potencia a la que han renunciado los promotores está en línea con las expectativas del sector, que apostaba por un 25% del total, y se ha quedado

en un 33%. Aún así, todavía se mantienen más de 82 GW de potencia con derechos de acceso concedido, más que de sobra para cumplir los objetivos de 2030.

La página web de REE aún no recoge el descenso resultante de las renunciaciones de los promotores, pero desde septiembre ha registrado 25 GW menos. Fuentes del Miteco han explicado que esos descensos no han tenido relación con las renunciaciones. REE nunca ha querido hacer ninguna declaración al respecto, remitiendo a este diario a la Cartera de Teresa Ribera.

Por otro lado, a finales de diciembre vence el plazo límite para que los proyectos que pidieron los derechos después de 2017 –la gran mayoría– presenten la autorización administrativa, y hay una carrera desatada para cerrar los contratos de compra o alquiler de los terrenos y obtener este permiso.

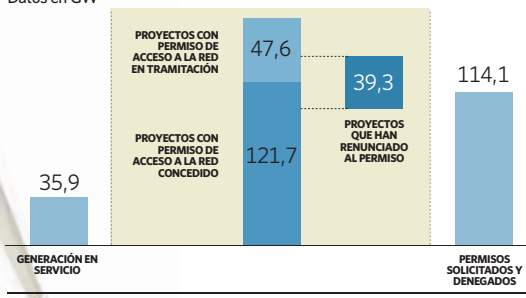
Hitos concretos

La autorización administrativa es el primero de los hitos de la tramitación que deben cumplirse, so pena de la ejecución inmediata de los avales presentados. Tras ella, hay 22 meses para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 25 meses para obtener la autorización administrativa previa, 28 meses para la autorización de construcción, y cinco años para culminar la instalación y disponer de la autorización de explotación definitiva.

En estos momentos está culminándose la tramitación de un Real Decreto de conexiones que regula la ejecución de los avales y solo la evita cuando no se obtiene la DIA por causas no imputables al interesado, lo que deja a las empresas a merced de que la Administración cumpla también con los plazos previstos.

Permisos para potencia eólica y fotovoltaica

Datos en GW



Fuente: REE, Miteco y elaboración propia.

elEconomista





EL RETO DE REDUCIR GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

CEOE plantea al Estado un ajuste de 50.000 millones

Fernández de Mesa aboga por la eficacia de los servicios públicos con menor coste, sin tener que subir impuestos

Carmen Obregón MADRID.

El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, recomendó este jueves al Gobierno introducir la eficacia del gasto en la Administración Pública, lo que supone reducir costes y maximizar servicios que mejoren la calidad de los mismos, en un 14%. Según el también presidente del Instituto de Estudios Económicos, esto seguiría las pautas de la UE, nos acercaría a la media de la OCDE, y al mismo tiempo no sería necesario subir impuestos. El vicepresidente de la patronal explicó que una actuación de este tipo -según un reciente estudio de la CEOE- podría suponer un ahorro a las arcas del Estado de 50.000 millones de euros.

Así se manifestó el alto ejecutivo de la patronal empresarial, en la ponencia de inauguración de las jornadas organizadas por *elEconomista* y FeiQue (Federación Empresarial de la Industria Química), y donde se abordaron *Los sectores estratégicos para la reactivación económica*.

Reformas

En el capítulo de reformas necesarias que defiende CEOE, y en consonancia con la letra pequeña de los fondos Next Generation UE -donde se exigen nuevas políticas estructurales a cambio de recibir dinero-, Íñigo Fernández de Mesa resaltó además de la reforma de la Administración en un proceso de ahorro público, "al que ya está acostumbrado el sector privado", la reforma fiscal, la de la sostenibilidad de las finanzas, la del ámbito del mercado de trabajo y, la de la formación.

De la reforma fiscal, Fernández de Mesa defendió el gran reto de lograr mayor crecimiento económico, mínima distorsión y maximización de la recaudación. Sostiene que en España "tenemos un IRPF de los más progresivos de la UE, hasta un 20% más". Y esto -analizó- "penaliza a las empresas españolas, que pagan muchos impuestos más, de manera que el sistema distorsiona a la economía y no promueve el talento".

Retos

De cara a cómo se encuentra la economía española, y cómo puede afrontar el futuro, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios aludió a las Cuentas Públicas, de las que señaló que "están



Fernández de Mesa, en las jornadas de eE y FeiQue.

El vicepresidente de la patronal calificó de inaceptable la tasa del paro en España

completamente desajustadas". Añadió que la UE nos ha dado "barra libre" por dos años, diagnosticando Bruselas para España un déficit del 8% y una deuda pública del 120%, lo que explica la magnitud de este gran reto.

Puso énfasis también en el "altísimo desempleo español", lo que catalogó de "inaceptable, siendo el más alto de los países desarrollados". Remarcó el bajo índice de la productividad española, "lo que hace difícil aumentar el bienestar de los ciudadanos, y complicado

que haya mejoras salariales. Y finalmente destacó el envejecimiento de la población española, la asignatura pendiente de la sostenibilidad de las pensiones y la elevada deuda del sector exterior.

Fortalezas

En el apartado de las fortalezas, Íñigo Fernández de Mesa ponderó que "España es un gran país con cualidades muy positivas". Y a propósito, distinguió a las grandes empresas, a un sector exterior muy potente - "exportamos tipo de bienes y servicios, no solo el turismo, y a pesar de este año, acabaremos con un superávit exterior"-, a un sector financiero muy sólido y a un sector privado desapalancado, "y mucho mejor que en 2012".



Más información en www.eleconomista.es



PRESUPUESTOS Y ‘JAPONIZACIÓN’ ECONÓMICA



Luis Garvía

Director del Máster en Riesgos Financieros de Icade Business School

Ya se han despejado la mayor parte de las incógnitas que teníamos hace unos meses acerca de los Presupuestos Generales del Estado, lo que nos permite asegurar que 2021 será continuista respecto a este 2020: será un año lleno de sorpresas y sobresaltos. ¿Qué sucederá más allá? También aportaremos luz aquí a esta cuestión.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno ha mostrado su lado creativo con el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto al diésel, las tasas Tobin y Google, el impuesto al plástico o el aumento indirecto de la carga fiscal a las aportaciones de los planes de pensiones, entre otras medidas. Con todas ellas se pretenden recaudar 20.000 millones de euros más que los recaudados en el año 2019. Se busca aumentar la recaudación sin considerar que

durante 2019 la cifra de desempleados osciló en torno a los 3,2 millones, y que todo indica que vamos a cerrar 2020 con más de 3,8 millones de parados, más de 740.000 personas en Erte y 40.000 empresas menos.

La comparación con el año 2019 es oportuna, ya que lejos de vivir entonces en la “normalidad”, nuestra economía ya mostraba

serios problemas estructurales. La pirámide demográfica estaba estrangulando nuestro obsoleto sistema de pensiones. De hecho, se prevé que el déficit de la Seguridad Social aumente un 10%, hasta a los 22.000 millones. En paralelo, parece que la Administración Pública seguirá anclada en el siglo XX. Sumando los más de 170.000 millones de presupuesto de la Seguridad Social al resto de conceptos de gasto público previstos en 2021, llegamos a un total de 550.000 millones. En cualquiera de los escenarios esperados de crecimiento se situará en torno al 50% del PIB. Con todo esto, el déficit del Estado pasará de los 30.000 a 110.000 millones. Este desequilibrio estructural se refleja también en el contraste entre los 16 millones de trabajadores que están en activo en el sector privado

frente a los más de 17 millones de personas que reciben rentas del sector público. Claramente insostenible.

A la vista de los datos anteriores, no extraña la preocupación de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, que insistía en la idea ya descrita de que los ingresos de los presupuestos

generales están sobrevalorados, y los gastos, infravalorados.

Inmersos en semejante encrucijada presupuestaria, nos dejamos caer en los brazos de Europa, de la deuda pública y del BCE, que vienen a ser lo mismo. De los 140.000 millones de euros prometidos por el Fondo de Reconstrucción en seis años, el Gobierno



ISTOCK

incluye en los presupuestos el monto correspondiente con el primer año: 23.000 millones de euros. De esta manera, el Gobierno hace un triple juego malabar: camufla el dinero entre todas las partidas presupuestarias, considera que este primer pago es subvención íntegra, cuando desde Europa se venía manejando una previsión de hasta el 50%,

prometiéndole emisiones de deuda para adelantar fondos, si estos no estuvieran disponibles.

Después de todos estos artificios, resulta difícil describir cómo quedará la situación de España en relación con la deuda pública, y en Europa probablemente compartan esta inquietud. En cualquier caso, todo dependerá del BCE y de su aparente capacidad de inyectar dinero sin fin. La frontera entre la política monetaria y la política fiscal ha saltado por los aires, e Italia ya ha amenazado con no pagar lo que debe. ¿Nos estamos acercando al reinicio (*reset*) de la economía global?

En el futuro próximo se dibujan dos escenarios aparentemente incompatibles, pero estrechamente ligados por la creciente desigualdad social. Por un lado, los amigos del Gobierno, las empresas tecnológicas y todo aquel que tenga alcance a los medios de producción digitales disfrutarán durante los próximos años de la conjunción de la política monetaria y presupuestos generales expansivos, las grandes tasas de ahorro y el final de la pandemia. Habrá derroche, e inflación en fiestas y activos que proporcionen rentabilidad: una mezcla entre los felices 20 y el periodo de expansión económica vivido después de la II Guerra Mundial. Por otro lado, el resto de la sociedad experimentará la *japonización* de la economía, pero con marcado carácter latino: hipotecas inaccesibles a muy bajos tipos de interés, consumo creciente de productos fabricados en China y un sistema tanto laboral como educativo más accesible y lleno de oportunidades, pero paradójicamente cada vez más alejado del gran público debido a la falta de medios y conocimiento.

Se quiere aumentar la recaudación sin tener en cuenta el mayor número de parados y los Ertes



La oposición 'infla' en 3.000 millones los Presupuestos al apoyar a los catalanes

PP, Vox y Cs votan, con otros grupos, enmiendas de ERC y Junts, rechazadas por PSOE y UP

El Gobierno logra pasar el trámite de las Cuentas en el Congreso con una mayoría de 189 votos

Xavier Gil Pecharromán MADRID.

Los votos de PP, Vox y Cs, sumados en ocasiones con apoyo de formaciones afines al Ejecutivo, sirvieron para aprobar enmiendas de ERC y Junts por un valor cercano a los 3.000 millones, que habían sido previamente rechazadas por los 155 votos de PSOE y UP.

ERC ha logrado así, aprobar una partida de 1.500 millones de euros para el Fondo de recuperación del empleo industrial en zonas con alto índice de pérdida de tejido industrial. Con ello, se pretende la movilización de recursos en el ámbito de las políticas activas de ocupación para fomentar la empleabilidad en las zonas más afectadas por la pandemia del Covid. Y también, una inversión de 200 millones para el fondo de mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad.

El Congreso ha limitado la subida del IVA a los productos azucarados -para no aplicarla a lácteos edulcorados-, y ha aumentado el gasto en partidas como la dependencia, en 566 millones para repartir entre las comunidades autónomas, doblando hasta los 2.600 millones lo recogido en las cuentas de 2018, pero también ha elevado partidas para la educación infantil.

Los Presupuestos han superado todas las votaciones sin incluir enmiendas que no fueran de los grupos del Gobierno y de sus socios presupuestarios, a excepción de una de Ciudadanos, pactada con el PSOE cuando aún se postulaba para aprobar las cuentas, y tres de Junts, aprobadas en contra del criterio de los grupos del Ejecutivo, en minoría en el Pleno de la Cámara Baja.

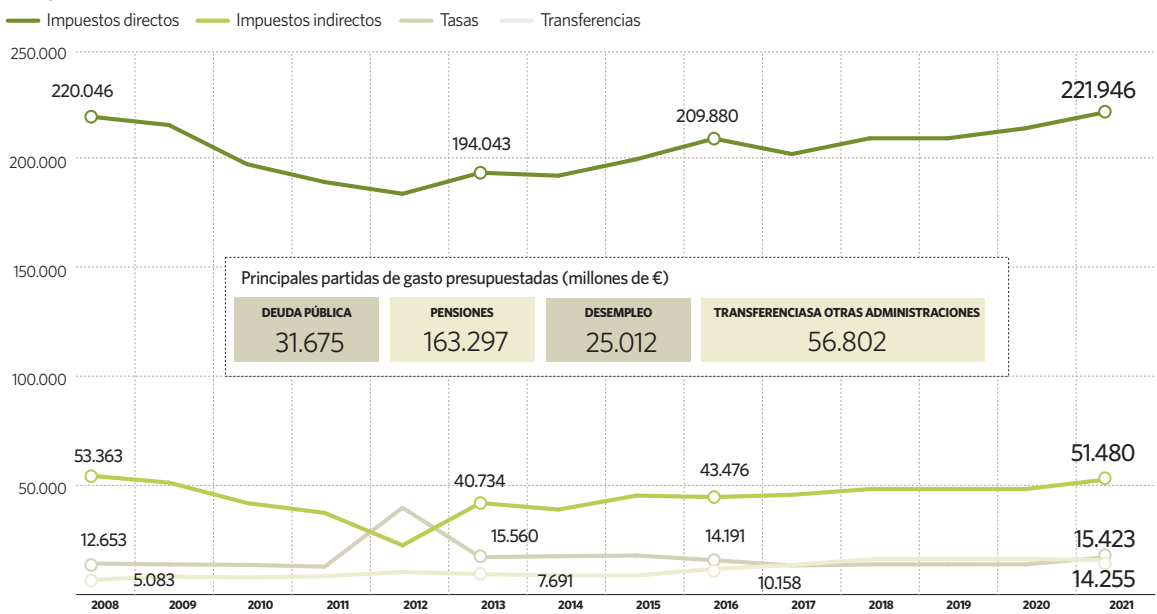
También, se han aprobado otras enmiendas difíciles de contabilizar, como la negociación del complemento específico del personal de Justicia y la recuperación para la pensión de los ejercicios no cotizados de jueces y demás funcionarios del ámbito de la Justicia.

Jaque al Rey

Sorprendió ayer que los grupos parlamentarios de Vox y Cs votasen ayer contra del Presupuesto de la Casa Real para 2021, fijado en 8,4 millones de euros y que salió adelante con el apoyo, entre otros del PSOE, UP y EH Bildu y PP. Vox y Cs justificaron su voto en contra de esta partida presupuestaria al tratar de tumbar los Presupuestos del Gobierno de coalición, ya que el

Previsión de ingresos del Gobierno para el próximo año

Principales vías de recaudación del Estado (millones de €)



Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021

elEconomista

El retraso de los fondos de la UE no preocupa

"El Gobierno estará el 1 de enero en condiciones de ir poniendo en marcha los Presupuestos con independencia del momento a lo largo del año en el que llegue la cantidad correspondiente a los fondos de Europa", explicó ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, tras la aprobación de los Presupuestos Generales para 2021. La ministra ha quitado importancia ante un posible retraso en la tramitación de los fondos europeos, por la amenaza de bloqueo de Hungría y Polonia, que dificultase la puesta en marcha del reparto de fondos. Los Presupuestos contemplan una primera anualidad de todo el paquete de ayuda por los efectos del Covid-19, con más de 26.000 millones de euros.

derribo de una sola de sus secciones implica la devolución de todo el proyecto. Para evitar ese riesgo ERC decidió a última hora retirar sus enmiendas al respecto.

No obstante, el Gobierno contaba con los votos de ERC, el PNV, EH-Bildu, el PDeCat, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PCR, que sumaban una mayoría holgada de 189 diputados, lo que supone el 54% de la cámara.

Agradecimientos de Montero

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a las votaciones, daba las gracias a las 11 formaciones que los han respaldado y, en concreto, a ERC y EH Bildu, "por dejar a un lado sus intereses partidistas y ofrecer un apoyo muy importante", ha dicho.

Sobre la decisión de Ciudadanos de negarse finalmente a apoyar las cuentas, a pesar de que llevaban meses negociando con el Gobierno, Montero ha defendido que "la responsabilidad recae únicamente sobre el partido naranja, y que se debe a cuestiones políticas". El PNV se mostró ayer preocu-

La portavoz del Gobierno agradece a los 11 grupos que han votado a favor de las Cuentas

pado por el reparto de los fondos europeos, tras los acuerdos obtenidos para dar su apoyo a los Presupuestos, lo que ha supuesto eliminar la subida fiscal al diésel, un plan Renove de 50 millones para la industria de la máquina-herramienta e inversiones territoriales.

También, el PNV obtuvo la venta al Ayuntamiento de San Sebastián de los cuarteles de Loyola; modificaciones legales para incentivar la participación empresarial en centros tecnológicos, incentivos a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, y transferencias por más de 30 millones de euros.

Con ERC, el acuerdo presupuestario se ha traducido en 100 millones de euros en inversiones ferroviarias en Barcelona -60 millones para el AVE y 40 millones para ferro-

carriles y cercanías-, una nueva moratoria de cotizaciones para empresas y autónomos de tres meses; 2,5 millones de euros a Salvamento Marítimo y otros cuatro millones para proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y asilados, dentro de un programa de cofinanciación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de ocho millones.

En el caso de EH-Bildu, la partida más cuantiosa va dirigida a reservar 10 millones de los fondos europeos para proyectos de I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico. Asimismo, las cuentas dirigen un millón de euros para el Cercanías de San Sebastián, con la previsión de otros 47 millones de euros hasta 2024.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguraba que "se ha consumado la traición a España del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su negociación política con Bildu y ERC".

Gamarra ha reprochado que PSOE y UP hayan vetado muchas de las enmiendas del PP dirigidas a bajar impuestos, apoyar a los autónomos o ayudar a sectores estratégicos como el turismo, el comercio o la industria.



La AIReF prevé un alza del déficit autonómico al 0,8% en 2021 y más desajustes desde 2022

La Autoridad Fiscal cree que parte del gasto Covid podría pasar a ser estructural tras la crisis

Gonzalo Velarde MADRID.

La AIReF prevé que las comunidades autónomas registren un déficit del 0,6% del PIB este año y del 0,8% del PIB en 2021, por debajo de la tasa de referencia del 1,1% fijada por el Gobierno, si bien alerta del riesgo de que el desajuste sea mayor desde 2022 ya que la financiación autonómica arrojará una liquidación negativa ese ejercicio. Además, estima que las entidades locales

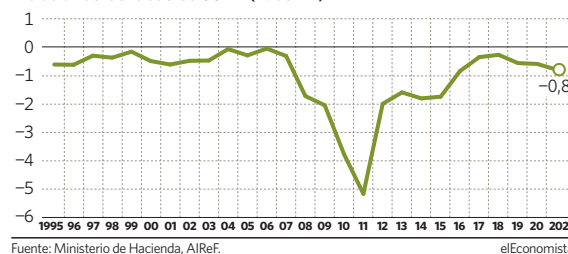
registrarán equilibrio este año y una décima de desajuste el próximo.

Así se desprende del informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de 2021 de las CCAA, en el que alerta de los posibles desajustes que se pueden producir en el saldo presupuestario de las regiones a partir de 2020 por el impacto de las liquidaciones negativas del Sistema de Financiación Autonómico, el menor importe de fondos vinculados al Plan de Recuperación y la ausencia de transferencias extraordinarias del Estado.

Desde AIReF avisan que esta situación se podría agravar con la consolidación de una parte del gasto incurrido en 2020 y 2021.

Repunte del desequilibrio financiero regional

Evolución del déficit de las CCAA (% de PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda, AIReF.

elEconomista

En cualquier caso, la estimación de déficit de la AIReF para 2021 es más positiva que la previsión del Plan Presupuestario, que sitúa la

tasa de referencia del déficit autonómico en el 1,1%. Según el organismo, esta diferencia se debe a los supuestos sobre el grado de conso-

lidación del gasto asociado a la crisis sanitaria, ya que consideran que, atendiendo a su naturaleza temporal y a la evolución de la pandemia, parte de estos gastos no se replicaría en 2021.

Riesgos crecientes

En este punto, la AIReF alerta del riesgo de menor disponibilidad de recursos para las comunidades en 2022 y 2023 por el impacto de las liquidaciones negativas del Sistema de Financiación Autonómico, el menor importe de fondos vinculados al Plan de Recuperación y la ausencia de transferencias extraordinarias del Estado.

En cuanto a la deuda, la AIReF prevé que se situará en torno al 26% del PIB en 2021, 1,4 puntos porcentuales del PIB inferior a la ratio esperada en 2020, por esta menor previsión de gastos Covid. Este nivel todavía sería superior en 1,6 puntos al registrado en 2019.



NEGOCIACIONES EN PUNTO MUERTO

El acuerdo de la UE y Londres sobre el 'Brexit', aún más lejos

Los Estados miembros piden al negociador europeo más transparencia sobre lo que está tratando con Johnson

Jorge Valero BRUSELAS.

El optimismo que se había filtrado de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido para acordar los términos de su futura relación comercial parece ser más bien un espejismo. Un alto cargo diplomático señaló ayer que “no estamos a horas de llegar a un acuerdo”, como algunas fuentes habían deslizado durante los últimos días. “Lo que aún debemos acordar es bastante sustancial”, añadió el mismo diplomático.

Los puntos conflictivos han sido los mismos prácticamente desde que arrancara la negociación en febrero: el acceso a las aguas pesqueras del Reino Unido, el régimen de ayudas de Estado y la similitud regulatoria entre ambos mercados.

Además, algunos Estados miembros consideran que el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, está estirando el mandato que le dieron los 27 hasta quedarse a “milímetros” de las *líneas rojas* fijadas, por lo que algunos Gobiernos están empezando a alzar la voz. Según explican fuentes diplomáticas, en algunos casos las capitales piden a Barnier que sea más transparente con los detalles que se está intercambiando con Londres, aunque todavía confían en el francés sin cuestionar su labor. Otros socios, como la propia Francia, están más intranquilos con los términos del acuerdo pesquero que está perfilando. París ya ha advertido que se requiere la unanimidad de los Estados miembros para aprobar el acuerdo, deslizando que está dispuesta a vetarlo si no queda satisfecha con el acceso a aguas británicas.

Si en el lado comunitario creen que Londres se tiene que mover para sellar la futura relación, los bri-



El primer ministro británico, Boris Johnson. EFE

Ley de Mercado Interior

La etapa final de la negociación coincidirá con el debate en el Parlamento británico de la polémica Ley de Mercado Interior la semana que viene. Esta ley ha enturbiado más aún el diálogo, ya que la UE acusa a Londres de violar el Tratado de Salida y el protocolo de Irlanda firmados en 2019, destinados a evitar que haya una frontera que afecte a la paz entre comunidades.

tánicos opinan que el paso debe llegar del bloque comunitario.

“Se está realizando un buen progreso, pero vamos a hacer un acuerdo que sea adecuado para Gran Bretaña, si tal *acuerdo* está disponible”, comentó a Sky el secretario de Educación británico, Gavin Williamson. “No vamos a firmar algo que sea en nuestro detrimento”, añadió.

Las fuentes diplomáticas llevan días insistiendo en que las próximas horas serán decisivas para saber si es posible cerrar un acuerdo que evite la reintroducción de aranceles, y dañe el intercambio comercial en un momento complicado.

El asunto llegará a la videoconferencia de líderes del próximo jueves y viernes, cuando haya mayor claridad sobre las posibilidades.



El ingreso mínimo vuelve al taller

● El escaso alcance de la medida lleva al Gobierno a iniciar su reforma apenas seis meses después de su entrada en vigor ● El ministro Escrivá reconoce que «ni de lejos» llegará a los 850.000 hogares que se fijaron como objetivo

DANIEL VIAÑA MADRID

El Gobierno ha fracasado en su intento por hacer llegar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 850.000 familias. Tanto, que el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que no se llegará a esa cifra «ni de lejos», y que se va a comenzar una revisión exhaustiva de una de las medidas estrella del Ejecutivo y que tanto el propio Escrivá como el vicepresidente Pablo Iglesias han tratado de hacer suya pero que, apenas seis meses después de su entrada en vigor, los datos demuestran que debe ser reformada.

«Claramente, no vamos a llegar», reconoció ayer Escrivá en una entrevista concedida al canal 24 horas de RTVE tras ser cuestionado por ese objetivo de 850.000 hogares. Según las cifras del propio Ministerio, Seguridad Social ha recibido 1,2 millones de solicitudes de las que, hasta el momento, sólo se han aprobado 160.000. El ministro trató de subrayar el «hito» que supone tramitar ese «elevado» número de solicitudes y quiso poner la atención en que esperan «avanzar significativamente» en el número de beneficiarios durante las próximas semanas. Pero aun así, el objetivo seguirá quedando muy lejos y, además, se desconoce con exactitud cuál es la razón por la que no se han cumplido las expectativas.

«No sabemos si los niveles de renta y patrimonio establecidos son más elevados de lo que pensábamos», señaló Escrivá, que adelantó la inminente evaluación que va a comenzar su Ministerio y que pretende tener lista en enero. «Estamos rechazando muchos porque superan el nivel de renta y patrimonio que hicimos a priori» y es necesario «redefinir la política», incidió el ministro.

Lo que Escrivá descarta es que los problemas del ingreso mínimo estén relacionados con los trámites que son necesarios para llevar a cabo la petición. Según un reciente estudio de la consultora Prodigioso Volcán, el lenguaje empleado por la Administración en el proceso necesario para solicitar el IMV es «formal y retorcido», la «legibilidad es baja», está compuesto por «más de 7.000 palabras y 22 páginas» y exige «un tiempo de lectura de 25 minutos». En otras palabras, no resulta sencillo.

El ministro, sin embargo, explicó que él mismo ha realizado el proceso y que no considera que sea tan complicado como señala esta compañía con la que, quiso recordar, ya trabajó cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque apuntó que es posible mejorar las relaciones con las Administraciones.

Tampoco la celeridad con la que se debió dar forma a la medida es,



Pablo Iglesias, María Jesús Montero y José Luis Escrivá, tras la aprobación del ingreso mínimo vital. IGNACIO GIL

EL 'PARAÍSO FISCAL' DE MADRID, SEGUNDA REGIÓN CON MENOS DÉFICIT

D. V.

Canarias registrará el próximo año un superávit del 0,4% de su PIB, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es la única región que presentará un dato mejor que la Comunidad de Madrid. En concreto, el «paraíso fiscal de Madrid», según la definición del portavoz de ERC

en el Congreso, Gabriel Rufián, registrará una desviación del 0,3%, un dato sensiblemente inferior a la cifra del 0,8% del conjunto de las comunidades y muy lejos del 2,3% hasta el que se separará la Comunidad Valenciana.

Así consta en las estimaciones la AIReF incluidas en el informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos 2021 de las Comunidades Autónomas. En el informe también se observa que la cifra de cierre que Madrid alcanzará en el presente año es igualmente positiva. Su déficit se quedará en el 0,2%, dato que Canarias supera una vez más y, en este caso, también Andalucía

(-0,1%). La publicación de las estimaciones se produce en un momento en el que el Gobierno pretende llevar a cabo una armonización fiscal y en el que se están incrementando las críticas hacia Madrid por incurrir en un supuesto dumping fiscal. Madrid se niega totalmente a esta armonización, y la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a llegar hasta el Constitucional ya que considera que la medida es un ataque a su autonomía fiscal. Otras, como Galicia, apuestan por armonizar a la baja mediante una horquilla que las permita preservar su política de bajos impuestos.

al menos por las conclusiones obtenidas y según fuentes del Ministerio, el motivo de su fracaso. Las prisas de Iglesias por sacar adelante la medida obligaron a Escrivá a adelantar los tiempos e, incluso, provo-

caron un enfrentamiento público entre ambos responsables. «Ahora mismo, ésa no es una de nuestras intuiciones, pero debemos ser cautos hasta que esté la evaluación realizada», explican desde Seguridad Social.

Todo esto se suma, a pesar de lo que trató de destacar Escrivá, a los retrasos que se están produciendo en la tramitación de las solicitudes del IMV. Recientemente, el Gobierno apuntó, en respuesta a una pregunta planteada en septiembre por el sena-

dor José Manuel Marín Gascón, de Vox, que la situación tiene su origen en los controles de calidad que sobre los expedientes realiza el personal de la empresa pública Tragsatec antes de remitirlos a los funcionarios, que son los autorizados a rechazar o admitir las solicitudes. Y ayer, el ministro completó esta explicación denunciando que «en 10 años, la Seguridad Social ha perdido el 20% de su plantilla». «Falta personal», añadió Escrivá, que ha denunciado esta situación en anteriores ocasiones.

Los retrasos no son algo que afecte únicamente a los expedientes del ingreso mínimo. Ni mucho menos. Las prestaciones por desempleo también acumulan retrasos notables e incluso las pensiones de jubilación están registrando, según los sindicatos, demoras superiores a las habituales. En opinión de las centrales sindicales, esto se debe a la falta de efectivos en puestos clave pero, también, a que los equipos y programas informáticos no están preparados para hacer frente a esta situación.

1,2

Millones de solicitudes se han recibido para cobrar el ingreso mínimo vital. Sólo se han aprobado 160.000.



La presión fiscal en la OCDE se redujo antes del coronavirus por primera vez desde 2009

La organización advierte de que la caída continuará este ejercicio por la crisis

L. D. F., Madrid
La pandemia del coronavirus ha resaltado la importancia de lo público: a más músculo de los Estados, más ayudas. Y eso que antes de la llegada del virus la presión fiscal promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descendió por primera vez en una década, aunque levemente: en 2019, tras 10 años de alzas constantes, los ingresos tri-

butarios promedio del club se situaron en el 33,8% del PIB, una décima menos que en 2018. El organismo con sede en París alerta de que esta ratio bajará más este año por la dureza con la que la crisis sanitaria se ha convertido en recesión económica.

“Esperamos ver disminuciones mucho más pronunciadas el próximo año, cuando el impacto de la covid-19 sea más evidente. En algún momento, cuando la cri-

sis sanitaria haya pasado y la recuperación económica esté en marcha, los Gobiernos deberán reconsiderar si sus sistemas fiscales están a la altura de los desafíos del entorno pospandémico”, señaló Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE.

El descenso registrado en 2019 se debe a que 15 países de los 35 de los que se tiene información actualizada redujeron la presión

fiscal de forma más pronunciada que las subidas experimentadas en el resto de países. En el grueso de los casos, se debió a que los ingresos crecieron menos que el PIB nominal.

Los mayores retrocesos se registraron en Hungría, con una caída de la presión fiscal de 1,7 puntos porcentuales, Islandia (1,1 puntos) Bélgica y Suecia (un punto). Entre los países que han registrado incrementos, el mayor ha sido

en Dinamarca (dos puntos) por una recaudación más elevada de lo esperado de los impuestos sobre la renta; en los demás las subidas han sido tímidas, por debajo del punto porcentual. En España, la ratio es el 34,6%, por encima de la media de la OCDE pero inferior a la eurozona.

Si la perspectiva temporal se amplía, hasta 31 países de la OCDE registraron en 2019 una presión fiscal superior a la que tenían en 2009, con Grecia, Japón y Eslovaquia liderando los incrementos, aunque Dinamarca es el país con la ratio más elevada (46,3%). En los otros seis países de los 37 que conforman el organismo, las reducciones más relevantes se dieron en Irlanda, con cinco puntos, y más de tres en Hungría.



Infraestructuras

Las constructoras plantean un macroplán con los fondos europeos

Seopan y Tecniberia presentan una propuesta a la Moncloa para destinar 100.000 millones de las partidas de la UE a obras con las que generar 1,4 millones de empleos hasta 2023

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
Barcelona

Las patronales Seopan y Tecniberia, que agrupan a las empresas constructoras y de ingeniería del país, plantearon ayer un plan de inversiones en proyectos que debería incluirse en el plan nacional de recuperación y resiliencia que prepara el Gobierno con fondos de la Unión Europea. La propuesta incluye 10 políticas tractoras o macroproyectos, cuya ejecución supondrían una inversión de 100.428 millones de euros, y que generaría 30.000 empleos en la actividad de ingeniería y 1.400.000 en general. El desarrollo de esos proyectos puede implicar una actividad económica inducida de 190.000 millones, según Julián Núñez y Pablo Bueno, presidentes de la patronal de las constructoras y las

firmas de ingeniería, respectivamente.

«El plan nacional de recuperación y resiliencia tiene adjudicados porcentajes en las políticas que el Gobierno ha decidido. Y las inversiones que planteamos se adaptan a esos porcentajes», comentó Núñez, quien además avanzó que la propuesta ha sido trasladada a la presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes.

Tras la definición de los proyectos que deberían llevarse a cabo, Seopan ha distribuido su impacto por comunidades autónomas. Según esta división, Catalunya sería la comunidad más beneficiada con proyectos que suponen una inversión superior a los 24.000 millones de euros, que deberían diseñarse y ponerse en marcha en el periodo 2021-2023.

Resumen del plan

El plan se resume en 2.277 actuaciones repartidas en 10 macroproyectos y 32 líneas de inversión, entre los que destacan las actuaciones en rehabilitación con 15.000 millones de inversión y efecto sobre más de 750.000 casas. Las subvenciones por parte del Estado alcanzarían los 12.740 millones de euros, lo que supone el 17,8% de las ayudas directas destinadas a España por parte de los fondos europeos, mientras que la inversión privada coparía el importe restante hasta los 100.000 millones de euros, es decir, el 87,3%. Esto plantea que por cada euro de inversión pública se activarían siete euros de fondos privados y el retorno fiscal alcanzaría los

Joan Cortadellas



Un tramo de carretera.

43.292 millones de euros, con una actividad económica inducida total de 190.500 millones de euros para todo el periodo.

Fase de preparación

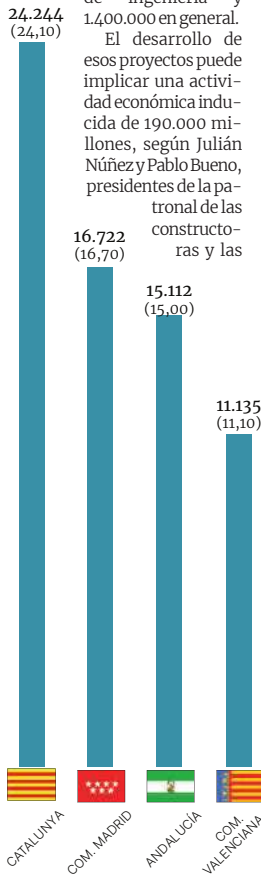
La fase de preparación de los proyectos comenzaría el próximo año y, antes de 2024, las distintas etapas de tramitación y adjudicación ya estarían resultando, con el propósito de continuar las labores de construcción hasta 2026. «Es un programa realista adaptado a los requisitos y exigencias del plan europeo Next Generation, que plantea un escenario temporal hasta el 2026 para la aplicación de los fondos, respetando así todos los plazos que prevé el programa», destacó Núñez en el marco de una rueda de prensa telemática.

Tanto él, como el presidente de Tecniberia insistieron en la necesidad de cambiar la tasa de descuento que prevé la legislación española para conseguir atraer capital privado, ya que, con una tasa de rentabilidad inferior al 5%, «es difícil encontrar fondos privados», argumentaron.

«España afronta el reto de invertir en nuestra economía, en cinco años, 72.000 millones de euros procedentes de las ayudas europeas, para lo que deberá presentar antes del 30 de abril de 2021 un plan detallando de las inversiones que afrontar con cargo a los fondos y justificar su adecuación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a cuyo cumplimiento está estrictamente condicionada la concesión de las ayudas», comentó Núñez. ■

Las cifras

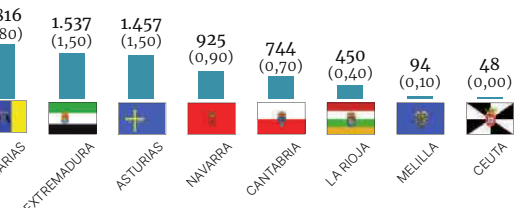
- **Rehabilitación** de más de 750.000 viviendas, para lo que se destinan 15.000 millones de euros que generarán 211.000 empleos.
- **Saneamiento** de redes de agua y prevención de inundaciones: 3.810 millones y 53.335 empleos.
- **Prevención de avenidas** que contempla una inversión de 1.397 millones y generará 19.554 empleos.
- **Plan de residuos** con una inversión de 5.390 millones y la generación de 75.460 puestos de trabajo.
- **Transporte público** con inversiones de 12.701 millones en Cercanías y 12.043 millones en metro y tranvía. Creará 346.427 empleos.
- **Tren** convencional, conexiones portuarias y autovías férreas movilizarán 14.469 millones.
- **Movilidad urbana** con efecto en vías urbanas, soterramientos y aparcamientos, contempla 9.934 millones y 139.000 empleos.
- **Movilidad conectada** que incluye inversiones de 20.155 millones y 282.141 puestos de trabajo.
- **Infraestructura sanitaria** para la que se requieren recursos por valor de 4.784 millones para crear 12.000 plazas sanitarias y 66.976 empleos.
- **Transformación digital** que contempla inversiones públicas directas por valor de de 750 millones.



Fuente: Seopan y Tecniberia

PROPUESTA

EN MILLONES DE EUROS. ENTRE PARÉNTESIS, EL PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE ESPAÑA



ALEX. R. FISCHER



Las CCAA deberán devolver 5.000 millones al Estado en 2022

J.D. Madrid

El desfase presupuestario que ha provocado el Covid en las comunidades autónomas en 2020, disparando el gasto y provocando una fuerte merma de los ingresos, no empezará a corregirse el año que viene. De hecho, seguirá creciendo. La AIREF estima que las CCAA cerrarán 2021 con un déficit del 0,8%, frente al 0,6% previsto para este año. Su pronóstico es más optimista que el del Gobierno (fija un objetivo del 1,1% para el conjunto de las autonomías) porque considera que parte de los gastos asumidos este año por la pandemia no se repetirán en 2021, según el informe presentado ayer por

la Institución en el que analiza las líneas fundamentales de los presupuestos de las CCAA. Sin embargo, la Autoridad Fiscal advierte de que el desfase podría agudizarse a partir de 2022 por "el impacto de las liquidaciones negativas del sistema de financiación, el menor importe de fondos vinculados al Plan de Recuperación y la ausencia de transferencias extraordinarias del Estado". Y es que la AIREF advierte de que la liquidación de 2022 será negativa en unos 5.000 millones de euros; es decir, una cuantía que deberán devolver al Estado y que ahondará en los desequilibrios de las cuentas regionales obligando, previsi-

blemente, a las autonomías a un mayor endeudamiento. Por ello, la institución urgió a las regiones a evitar en lo posible el gasto estructural y a elaborar planes de ajuste fiscal, mientras pidió a Hacienda planes para que se pueda digerir esa liquidación negativa en varios ejercicios y diluir así su impacto sobre las cuentas autonómicas.

En este contexto de gradual aumento del déficit, la AIREF prevé que en 2021 únicamente Canarias registrará superávit, ocho comunidades cerrarán por debajo de la meta fijada por Hacienda (-1,1%), mientras que cuatro la igualarán (Aragón, Cantabria, Castilla y León y Nava-

rra) y otras cuatro la rebasarán holgadamente, en un escenario en el que la institución ha supuesto que la distribución de la transferencia extra del Estado para reducir el déficit de las CCAA rondará para cada una el 1,1% del PIB regional. Con esta premisa, Madrid, que en los últimos días se ha situado en el ojo del huracán entre amenazas de armonización tributaria y acusaciones de *dumping fiscal*, será la autonomía con

Madrid registrará en 2021 el menor déficit, mientras que Valencia liderará el desfase

menor déficit el año que viene, con un 0,3%, muy inferior a la media del 0,8% que augura la AIREF y tres veces y media por debajo del objetivo marcado por el Ejecutivo. Pese al fuerte impacto de la pandemia, será (de materializarse) un dato muy similar al registrado en 2018 y 2019 (déficit del 0,24% y 0,27%, respectivamente), evidenciando la resiliencia del modelo económico de la región. Al otro lado de la balanza figura la Comunidad Valenciana, cuyo déficit, según las estimaciones de la AIREF, se disparará hasta el 2,3% en 2021 frente al 1,6% esperado para este año, más del doble de la referencia oficial y prácticamente el triple

que el 0,8% calculado por la Autoridad Fiscal para el conjunto de las CCAA. Valencia arrastra desde hace años el déficit más abultado entre las regiones españolas, circunstancia que sus dirigentes políticos atribuyen a su ya crónica infrafinanciación, aunque la peor financiada es Murcia, que, sin embargo, cerrará 2021 con un desvío del 1,7%.

La AIREF no quiso entrar ayer a valorar la armonización fiscal que proyecta el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí deslizó que cualquier reforma impositiva debería abordarse en el marco de la financiación autonómica y de una estrategia fiscal nacional a medio plazo.



EL CONGRESO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Sánchez consolida el 'club Frankenstein' y se garantiza tres años más en Moncloa

VÍA LIBRE A LOS PRESUPUESTOS/ El Gobierno consigue el apoyo a las cuentas públicas de once formaciones y 189 diputados. El presidente cede ante populistas, separatistas y filioetarras para mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura.

Iñaki Garay, Madrid

La aprobación ayer de los Presupuestos Generales del Estado suponen un salvoconducto a Pedro Sánchez para transitar con cierta tranquilidad durante los tres años que restan de legislatura. El presidente se ha apoyado en Podemos, ERC, PNV, Bildu, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe para ahormar una mayoría amplia de 189 escaños que dan soporte a un proyecto de cuentas públicas que por primera vez en mucho tiempo destaca más por la letra pequeña que por los números que contiene. Los Presupuestos, que deberían ser el trampolín para lograr la ansiada salida a la crisis en la que está sumida España con motivo de la pandemia del Covid, se presentan ahora como una suma de voluntades particulares que difícilmente se pueden identificar con el interés general que debe mover todo proyecto de cuentas públicas, y más en estos momentos en los que la economía española se precipita por la pendiente de una crisis sin precedentes. Sánchez, que pretendía a toda

costa permanecer en el poder eludiendo cualquier acercamiento al centro derecha, lo ha conseguido gracias a la redacción de su proyecto Frankenstein, un pacto con muchas formaciones, que, tras el epíteto de progresistas, esconden proyectos que chocan con la ortodoxia económica que recomiendan los organismos internacionales o el propio Banco de España o incluso con el propio ordenamiento jurídico y la Constitución.

Aunque el Gobierno ha eludido responder a las motivaciones últimas del apoyo a los Presupuestos de algunas formaciones, la sospecha se cierne sobre muchos de los acuerdos. El indulto a los condenados del procés y la reforma del delito de sedición, que, lejos de disuadir anima a repetir la intentona vivida en Cataluña hace poco más de dos años, están en la trastienda del apoyo a estas cuentas por parte de ERC. De la misma manera que lo está la cesión del PSOE ante la propuesta de la formación secesionista catalana de penalizar fiscalmente a Madrid. Una maniobra polémica que amenaza con frustrar las posibilidades futuras de cualquier



La ministra María Jesús Montero recibe el aplauso de la bancada socialista tras la aprobación de los Presupuestos en el Congreso.

candidato que los socialistas presenten a las próximas elecciones autonómicas en este territorio. Pero Sánchez, que ejerce la política partido a partido, ha dejado claro que su proyecto personal está por encima de cualquier otra consideración futura de la forma-

ción que dirige. La letra pequeña del acuerdo con Bildu contiene elementos de política penitenciaria. Desde el acercamiento de presos hasta otras cesiones aún no declaradas, pero que el tiempo se encargará de ir destapando. Y el acuerdo con el PNV contem-

pla una política seguidista de privilegios a las que otras formaciones se han prestado también en el pasado para conseguir la media docena de respaldos que aportan los nacionalistas vascos. El resto de los apoyos se completa con un *qué hay de lo mío*, acorde cada

uno a su aportación. Una suma de facturas que pesarán como una auténtica losa sobre el bolsillo de unos contribuyentes españoles cada vez más exhaustos por la virulencia de la crisis. Lo que se le reprocha a Sánchez en el terreno económico es que no haya dudado



La alianza con Bildu y las cesiones a ERC, incluido el ataque fiscal a Madrid, lastran al PSOE

El alza de impuestos para pagar los apoyos son ahora amenazas para la recuperación

en prometer unos recursos que España no tiene para conseguir los apoyos que le garantizan su continuidad. Y se le reprocha una huida fiscal hacia delante que va a cargar de impuestos a los ciudadanos y a las empresas, lo que amenaza con gripar motores importantes para la recuperación como el consumo y la inversión.

Lo que el PSOE presentó ayer como un gran triunfo y un ejercicio de consensos democráticos parece, a nada que se profundiza en la naturaleza de las alianzas, más bien un desempeño de lo que Rousseau en *El Contrato Social* denominaba olocracia; una degeneración de la democracia que, recogiendo las reclamaciones de una mayoría, desprecia la voluntad general. En principio, el triunfo que esgrime Sánchez aparece en las actas con el apoyo de 12,4 millones de votantes, frente al rechazo de 11,1 millones. Sin embargo la pregunta es ¿qué porcentaje de los seguidores del PSOE que hace unos meses respaldaron a Sánchez cuando este les prometió que por nada del mundo gobernaría con Podemos se ha desenganchado una vez conocida la deriva del sanchismo? Una deriva que ha sido criticada por una buena parte de los líderes tradicionales, empezando por Felipe González, e incluso tímidamente por algunos de los barones. Este ejercicio de escapismo se completa con la participación en el primer Gobierno de coalición de Podemos, una fuerza política que, a cambio de su apoyo y su contribución en la configuración de la mayoría que ha permitido a Sánchez aprobar los Presupuestos, está arrastrando al PSOE a cuestionar los consensos del 78, incluida la legitimidad de la Monarquía. Hay quien cree ahora que, una vez aprobados los Presupuestos, Sánchez tomará una cierta distancia con todos estos socios. El problema es que, hasta ahora, Sánchez no ha decepcionado a aquellos que se temieron lo peor.



El Gobierno estudia ahora una jornada de 32 horas semanales

Los empresarios, perplejos ante la propuesta de Iglesias. «Con la que está cayendo es irreal». Una enmienda similar fue rechazada por Podemos en el Congreso hace dos días

J. de Antonio - Madrid

Jornada laboral de 32 horas y cuatro días a la semana de trabajo. Esa es la última bomba del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en plena segunda ola, a las puertas de la tercera y con la peor pandemia del último siglo golpeando los cinco continentes. «Está en nuestro programa», defendió ayer en una entrevista televisiva. Con su habitual facilidad para levantar polvaredas, Iglesias quiso plantar ayer esta semilla de la discordia, aunque el momento elegido no parezca el más adecuado. «Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ya está estudiando y trabajando en ello para presentarlo en el marco del diálogo social porque favorecería sin duda la generación de empleo», dijo.

Pero este debate se presenta estéril de cara a la negociación en la mesa de diálogo social. Al menos por parte de los empresarios y de las y los autónomos, que ven esta idea como una «ocurrencia más» por parte del vicepresidente morado. «Ni es el momento ni es posible. Los políticos deberían bajar al mundo real y, con la que está cayendo, ver cómo está la situación antes de lanzar propuestas que no tienen sentido ahora mismo y que son irrealistas para la inmensa mayoría del tejido empresarial». Con esta rotundidad y claridad meridiana se manifestó Pedro Fernández, secretario general de Cepyme, aunque no quiso ir más allá, porque «ni siquiera se nos ha planteado esta posibilidad». Una vez que la presenten, los empresarios han prometido estudiarla, pero la actual situación de crisis lo hace prácticamente inviable. «En la mesa de diálogo se presentan muchas propuestas, pero no todas salen adelante. Si finalmente esto llega para ser discutido se estudiará y se valorará, pero ahora mismo no tenemos nada. Hay otras cosas

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso



DANI DUCH / POOL

LA CLAVE

El rechazo de solicitudes del ingreso mínimo, en duda

El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció ayer que el Ingreso Mínimo no va a llegar «ni de lejos» a los 850.000 hogares que se preveía cuando se creó. En los meses en los que lleva activa esta prestación se han tramitado más de 1,2 millones de solicitudes, de las que se han aceptado 160.000. Según reconoce, la mayoría de las denegaciones se han debido a que los hogares superan el límite de renta. «A lo mejor lo hemos puesto demasiado elevado».

más importantes y prioritarias que están pendientes y es en lo que nos vamos a centrar», manifestaron fuentes de la patronal CEOE, que prefieren evitar la confrontación.

Los que tienen claro que la propuesta «no tiene sentido» son los autónomos. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, recuerda la imposibilidad de una medida así en infinidad de negocios, en los que la dedicación es plena y los recursos más que limitados. «Que venga el señor Iglesias y le cuente a un autónomo su propuesta y a ver qué le dice, incluso entre los autónomos empleadores, que dan trabajo y tienen que afrontar todos los meses las nóminas de sus trabajadores».

Como recuerda Amor, todavía no han presentado la propuesta, pero la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se apresuró ayer a recoger el guante lanzado por el líder su partido y defender que ha llegado el momento de abordar el debate sobre la reducción de la jornada laboral, el control de las horas extraordinarias, el derecho a la desconexión y la conciliación de la vida laboral y familiar. «El tiempo de trabajo exige una nueva concepción que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales», defendió Díaz en su cuenta de Twitter.

Fuentes ministeriales explicaron a este diario que «nuestro compromiso siempre fue estudiar el tiempo de trabajo, una de las claves laborales del siglo XXI. Todo se estudiará, pero este tema hay que abordarlo en toda su integridad: la jornada, las horas extras, la distribución irregular de la jornada, todo. Es una pro-



puesta que llevamos en nuestro programa y como nuestra intención es cumplirla».

Cierto. En el acuerdo del Gobierno de coalición rubricado por PSOE y Podemos se recogía su intención de «promover un pacto social y político para la racionalización de los horarios y usos del tiempo», con el objetivo de «reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados», además de plantear otros objetivos como «el derecho a la desconexión» y a la «adecuada gestión del tiempo de trabajo dentro de la normativa laboral».

Pero, ¿por qué lanzó ayer Igle-

El vicepresidente asegura que el Ministerio de Trabajo explora ya la opción de recortar a cuatro días la jornada

sias esta propuesta contradiciéndose a sí mismo una vez más? Un sinsentido si nos atenemos a lo que pasó hace apenas dos días en el Congreso. Allí fue rechazada, con los votos de PSOE y Podemos, una enmienda de Más País en la que se recogían buena parte de estas ideas, incluida la jornada de 32 horas y 4 días a la semana, y que fue despachada con un «ahora no toca».

Según defienden Iglesias y Díaz, reducir la jornada generaría empleo, pero no han explicado si eso supondría para los empleados perder parte del sueldo en beneficio de otros. Según fuentes empresariales, el 50% de los trabajadores en jornada parcial quieren trabajar a jornada completa y la tasa de pobreza laboral entre los que trabajan a tiempo parcial se sitúa en el 15,7% y duplica a la de los ocupados a tiempo completo (7,8%).



Las autonomías deberán devolver 5.000 millones al Estado en el 2022

La Airef avisa de que las comunidades afrontan un descenso de ingresos

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

La onda expansiva de la crisis golpeará de lleno las cuentas de las autonomías dentro de un par de años. En el 2022 y el 2023, advirtió ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el déficit de las comunidades corre el riesgo de dispararse por una disminución de los ingresos, debida en parte a las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico. En concreto, como ya ocurrió en la anterior recesión, la Autoridad Fiscal estima que, dentro de dos años cuando se comparen las entregas a cuenta recibidas este 2020 con la recaudación tributaria real del ejercicio, las comunidades se verán obligadas a devolver al Estado 5.000 millones de euros. En plena pandemia, el Ministerio de Hacienda decidió no cambiar las entregas a cuenta iniciales –a pesar de la más

que previsible caída de la recaudación– para mantener abierto el grifo de dinero público a las comunidades, el nivel de la administración de primera línea en la lucha contra la crisis sanitaria y social.

A punto de cerrar el año, el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas calcula que, en el 2022, la liquidación negativa de las entregas a cuenta del ejercicio 2020 le supondrá a las comunidades perder cuatro décimas del PIB, mientras que en el 2023 estiman que serán otras tres décimas. Cuando la liquidación del 2013 resultó negativa para algunas comunidades, Hacienda concedió diez años de plazo para devolver lo recibido de más.

El organismo que preside Cristina Herrero alerta además de la esperada reducción de otras fuentes de financiación en los próximos años por una caída en las partidas vinculadas al fondo de recupera-



EMILIA GUTIERREZ/ARCHIVO

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero

Calviño: “Revisar la financiación”

■ La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió ayer la armonización fiscal que quiere llevar a cabo el Ejecutivo y subrayó que es necesario “sentar a todas las comunidades autónomas” para revisar “todo” el sistema de financiación a partir de 2021, “y no quedarse solo en uno u

otro elemento”. Así respondió, en declaraciones a Telecinco, al ser preguntada por las ‘ventajas fiscales’ de País Vasco y Navarra y por la intención del Gobierno de lograr una armonización fiscal entre territorios. Según dijo, el Gobierno quiere evitar “situaciones injustas” en materia fiscal que perjudiquen a algunos territorios.

ción y la desaparición de transferencias extraordinarias comprometidas hasta ahora por el Estado para afrontar la pandemia.

Por otra parte, recalca que la situación presupuestaria de las autonomías puede “agravarse” aún más si “una parte importante” de los gastos realizados entre el 2020 y el próximo año se convierten en estructurales.

La Airef calcula que el déficit autonómico al cierre de este ejercicio será del 0,6% del PIB y subirá hasta el 0,8% en el 2021. En paralelo, Catalunya tendrá un desfase presupuestario equivalente al 0,5% del PIB tanto en el 2020 como el próximo año, y será una de las nueve comunidades autónomas que no superará la barrera del 1% de déficit.

A partir del 2022, insiste el organismo independiente, la carga del déficit en algunas autonomías y la liquidación negativa de las entregas a cuenta acarrearán mayores necesidades de endeudamiento. La Airef calcula que hará falta “al menos una década” y una reducción de 0,25 puntos de PIB de déficit estructural cada año para que el nivel de deuda de los gobiernos territoriales vuelva a los registros de finales del 2019 –se situó en el 23,7% del PIB–.

Por todo ello, la Airef pide a las comunidades que estos momentos eviten implantar medidas de gasto estructurales salvo que vayan acompañados de nuevos ingresos con que financiarlas. Así mismo, la Autoridad Fiscal vuelve a hacer un llamamiento al Gobierno central para que encabece la elaboración de una estrategia “realista y creíble” que permita reequilibrar las cuentas de todas las administraciones a medio plazo.●



La OPEP pacta una subida modesta de la producción

El cártel duda que la economía pueda absorber más petróleo

BARCELONA Redacción

El plan original del cártel de países exportadores de petróleo (OPEP) era ir subiendo el año que viene la oferta de crudo en el mercado, una vez que la pandemia hubiese sido controlada y la demanda volviera a encarrilarse a medida que la economía arrancara de nuevo.

Pero el acuerdo, que se pactó la pasada primavera, cuando tras el confinamiento se optó por un macrorrecorte de la producción de casi diez millones de barriles diarios, no podía prever la llegada de la segunda ola, que ha estropeado la estrategia. Según lo previsto, hubieran tenido que volver al mercado el uno de enero el equivalente a unos dos millones de barriles diarios.

Sin embargo, los países exportadores llegaron ayer a la conclusión de que la recuperación económica actual es todavía muy frágil. La economía mundial, que no acaba de retomar su senda, no puede absorber tanto crudo de golpe. Así que la OPEP y sus aliados (liderados por Rusia) decidieron ayer un término medio: aumentar de forma gradual y moderada el nivel de su producción de petróleo a partir del 1 de enero, pero en no más de 500.000 barriles diarios al mes (es decir, sólo un cuarto de lo planeado inicialmente).

La medida será revisada cada cuatro semanas, con lo que los futuros incrementos serán graduales. Es la constatación de que la economía mundial sigue enferma. Pero también es una decisión fruto del compromiso entre los países que querían abrir el grifo, como Emiratos Árabes (en particular para aumentar sus ingresos



CHRISTOPHER PIKE / REUTERS

Un hombre retratado en la petrolera estatal de Emiratos Árabes

fiscales), y los que temían de esta manera provocar un desplome ulterior de los precios al causar un nuevo excedente. “El acuerdo logra el objetivo principal de Ara-

En abril se acordó un incremento muy superior, pero la segunda oleada obliga a revisar los planes

bia Saudí, a saber, evitar la acumulación de existencias de crudo durante el primer trimestre”, dijo a Bloomberg Amrita Sen, cofundadora de la consultora Energy Aspects. “Es una decisión sabia”, afirmó el ministro de Petróleo de Irán, Bijan Namdar Zanganeh.

“Estas reuniones mensuales pueden ayudar a preservar la estabilidad en el mercado y los suministros adicionales que llegarán en enero no tendrán un gran impacto”, aseguró. El barril de Brent se apreció ayer ligeramente en Londres, hasta los 48,59 dólares.

Por primera vez en mucho tiempo, el auge del *shale oil* estadounidense, es decir el crudo de esquisto resultante de la extracción mediante fracturación hidráulica en EE.UU. (*fracking*), no estuvo sobre la mesa.

La industria norteamericana, tras la caída de las cotizaciones, se encuentra en profunda crisis, ahogada por deudas y quiebras. Estados Unidos, que se había convertido en primer productor mundial, dejará de producir más de tres millones de barriles diarios este año.●



NOTICIAS DESTACADAS MEDIOS DIGITALES

Viernes, 4 de diciembre de 2020

Una mirada a la productividad española durante los últimos 170 años

Si queremos relanzar la productividad, necesitamos de más libertad económica y de menos subsidios y privilegios regulatorios a las empresas

[Juan Ramón Rallo](#)

Existen dos formas de incrementar nuestra renta per cápita: o **trabajar más horas o volvernos más productivos por cada hora que trabajamos**. La primera estrategia tiene más recorrido del que en principio podría parecer: aumentando la población activa, reduciendo la tasa de paro y no desincentivando fiscalmente las jornadas a tiempo completo puede lograrse un muy importante incremento de nuestra renta per cápita (gran parte de las diferencias entre Europa y EEUU responden justamente a eso: las menores horas trabajadas en Europa debido, entre otros factores, [a los más elevados tipos marginales dentro del IRPF](#)). Pero, en todo caso, es obvio que a largo plazo la única forma de aumentar sostenidamente nuestro bienestar es con una mayor productividad por hora trabajada: no solo porque, para una población dada, existe un número máximo de horas potencialmente 'trabajables', sino porque **parte de nuestro bienestar puede proceder precisamente de reducir el número de horas trabajadas** sin experimentar mermas en nuestros ingresos, algo que solo podemos lograr con mayor productividad.

Y, a este respecto, las noticias no son positivas para la economía española: **nuestra productividad lleva 30 años estancada**, de ahí que el crecimiento de la renta per cápita que hemos experimentado durante estas tres décadas se haya debido en gran medida al aumento de horas trabajadas.

Ciertamente, en un país como España, con una tasa de actividad tan modesta y una tasa de paro tan elevada, todavía contamos con margen para continuar creciendo mediante la creación de empleo. Pero, al margen de que, como ya hemos señalado, **se trata de una estrategia limitada en el largo plazo**, apostar por el crecimiento extensivo en lugar de por el intensivo (mayor uso de factores en lugar de un mayor aprovechamiento de cada factor) constreñirá la revalorización de los salarios reales y nos abocará a que, en términos generales, los ingresos medios solo aumenten por hogar (por incremento de la ocupación media por familia) y no tanto por trabajador. Así pues, más nos valdría empezar a preocuparnos por la evolución de la productividad y, en particular, por cómo podemos mejorarla.

En este sentido, los economistas **Leandro de la Escosura y Joan Rosés** [nos acaban de proporcionar](#) una estimación de la evolución de la productividad en España durante los últimos 170 años, así como de los factores que la han estimulado y de los que la están frenando. Las conclusiones, de las que cabe extraer las pertinentes lecciones, son las siguientes.

Primero, entre 1850 y 1950, el PIB español creció a una media anual del 1,5%, siendo la mejora de la productividad responsable de nueve décimas de ese crecimiento (y el aumento de número de horas trabajadas, de las otras seis décimas); durante el desarrollismo español, el PIB se disparó a un crecimiento anual del 6,2%, y prácticamente todo ese crecimiento (5,8 puntos de los 6,2) se debió a una mejoría de la productividad; a partir de 1975, el **crecimiento ha ido fluctuando en función del entorno macroeconómico**, dado que apenas volvimos a crecer un 1,5% entre 1975 y 1985 (y en este caso, gracias al aumento de la productividad debido a la reconversión industrial, esto es, al cierre de industrias ineficientes), posteriormente, con la entrada en Europa, nos expandimos a un ritmo del 3,7% anual (pero apenas 1,2 puntos fueron por mejora de la productividad), y tras la crisis 2008-2013, volvimos a crecer al 2,6%, pero esencialmente por el incremento de horas trabajadas (dos puntos de 2,6). En suma, salvo en la etapa desarrollista (y durante los felices años veinte), España no ha sido capaz de crecer sustancialmente (por ejemplo, por encima del 2,5% anual) **sin depender esencialmente del incremento del número de horas trabajadas**. Crecimientos elevados merced a aumentos notables de la productividad nos son desconocidos.

Segundo, el motor del aumento de nuestra productividad, salvo en la época desarrollista, ha sido la **acumulación de capital por trabajador y no la mejora de la eficiencia de los procesos productivos** por incorporación de nuevas tecnologías: en el conjunto del periodo 1850-2019, el incremento del capital por trabajador es responsable de la mitad del aumento de la productividad, mientras que las mejoras de eficiencia solo de un tercio. La eficiencia del proceso productivo ha mejorado especialmente en aquellos periodos en los que hemos incorporado tecnología extranjera disruptiva: por ejemplo, los ferrocarriles en el periodo 1850-1892, la electrificación durante la década 1920-1930 o la industrialización sobre la base de la producción en masa durante el periodo 1954-1975. En el resto de etapas, sin embargo, la evolución de la eficiencia ha sido bastante pobre, hasta el punto de que entre 1986 y 2013 fue negativa (en parte, porque la economía española se reestructuró hacia sectores poco intensivos en tecnología, como la construcción) y **desde 2013 apenas ha experimentado una muy tímida remontada**.

Tercero, ¿cuáles son las causas de este estancamiento persistente de la productividad, mucho más gravoso que en el resto de Europa? De acuerdo con los autores, las restricciones a la competencia en los mercados de bienes y de factores productivos, junto a los subsidios gubernamentales y a los privilegios otorgados a los grupos de presión, **explican la baja inversión en I+D+i y en otros activos intangibles**, lo que contribuye a impulsar sectores económicos intensivos en trabajo de baja cualificación en lugar de sectores intensivos en capital e innovación (personalmente, también añadiría la burbuja crediticia como un elemento que ha inducido una sobreinversión en sectores de bajo retorno que pasaron a volverse atractivos al calor de los bajos tipos de interés).

Así pues, si queremos relanzar la productividad para a su vez relanzar un crecimiento económico intenso que sea sostenible a largo plazo, **necesitamos de más libertad económica y de menos subsidios y privilegios regulatorios a las empresas**. No parece, por desgracia, que vayamos a aprovechar los 140.000 millones de euros de Bruselas para nada remotamente parecido a eso.

https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-informacion-privilegiada-consultoras_0_1415859668.html

El Gobierno ofrece a las consultoras información privilegiada a cambio de su ayuda con los fondos europeos

El Ejecutivo pide colaboración a las consultoras para redactar el nuevo decreto para los fondos. Otros ministerios están conversando con el sector a través del sistema del “probono”, que consiste en obtener asesoría gratis a cambio de ofrecer información para sus clientes

[Luca Costantini](#)

El Gobierno de [Pedro Sánchez](#) mantiene conversaciones con grandes consultoras para la implementación de los fondos europeos contra el coronavirus. Fuentes gubernamentales revelan que esas empresas están ayudando al Ejecutivo en la **modificación del decreto** para agilizar la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Pablo Iglesias](#) se quejó por su exclusión y La Moncloa está trabajando contra reloj para retocar ese documento. También en este caso el Gobierno se apoya en expertos del sector privado.

La actividad de las consultoras se centra en mantener conversaciones con miembros tanto de La Moncloa como de varios ministerios. Según las fuentes consultadas, los departamentos de **Economía, Industria y Cultura**, entre otros, ya están activando canales directos con los expertos de ese sector. Se han realizado reuniones con miembros de la oficina económica de La Moncloa (lo mismo ha ocurrido con fondos de inversión) y **encuentros discretos** en las sedes de dichas empresas con delegados ministeriales.

Las consultoras están operando a través del sistema “**probono**”. Se trata de un mecanismo que permite tener acceso a datos de primera mano del Gobierno (como las condiciones de los concursos, además de líneas de crédito y criterios utilizados para superar el filtro ministerial para los fondos europeos). Esta información, que las entidades locales todavía desconocen oficialmente, le servirá más adelante para incluirla en los informes para sus clientes. Ese es el *precio* que, al menos de momento, paga el Gobierno para obtener la colaboración de forma gratuita de **estas empresas, sin tener que contratarlas formalmente**.

Oficinas 'ad hoc'

Todas las grandes firmas del sector, desde KPMG hasta Ernst & Young y PwC, están **abriendo oficinas únicamente destinadas al plan de recuperación europeo y algunas de ellas ya hablan con varios ministerios**, según revelan fuentes gubernamentales. También la [CEOE](#) ha abierto una oficina *ad hoc* para ello (con la colaboración de PwC), con la esperanza de colaborar activamente con el Gobierno en esa delicada operación. Lo mismo han hecho entidades como Deloitte, Everis y Auren.

“**Va a haber cambios en el decreto para los fondos europeos**”, explican fuentes conecedoras de la relación directa entre el Gobierno y estas empresas. “Las consultoras ayudan porque si no luego no hay quien gestione los fondos”, afirman para explicar el interés de las firmas que trabajan en auditoría y asesoramiento.

Para Moncloa es esencial resolver el **problema de la ejecución de los fondos europeos**. Fuentes gubernamentales revelan que la cuestión está en agenda desde hace meses, y que el Gobierno tiene el objetivo de aprovechar todos los recursos en tiempo y forma ([en total 140.000 millones, aunque la mitad de ellos llegará a fondo perdido](#)).

Evitar una baja ejecución

Fuentes del Ejecutivo reconocen que el “reto” será de los más importantes de su historia reciente. Por ello será esencial la **coordinación con todas las entidades locales, además del sector privado**. [El Gobierno dejará a las comunidades autónomas una parte importante en la tarea de vigilancia](#). Aunque el ministerio de Calviño aspira a tener otro papel relevante, consciente de la debilidad del equipo de asesores de La Moncloa.

La colaboración público-privada será crucial. Más aún porque todavía **se desconoce la letra pequeña del plan europeo de ayudas**. Todo apunta a que el dinero comunitario no llegará de manera directa, sino que se entregará después de que el Estado ya lo haya recaudado con sus canales.

En esta operación de **búsqueda de financiación**, los fondos y las grandes empresas nacionales juegan otro rol protagonista. Es por ello que expolíticos que trabajan en el sector de la auditoría o la comunicación ya se preparan para ejercer de **intermediarios** con las empresas interesadas en obtener el dinero europeo. Para recibir dichos fondos, el Ejecutivo actuará de filtro para que los proyectos lleguen a Bruselas. Es en esta delicada fase en la que las consultoras aportarán su servicio a cambio de recibir información privilegiada.

“**El ridículo que puede hacer el Gobierno si solo ejecuta un tercio de los fondos es gravísimo**”, reconocen las fuentes consultadas. Actualmente, España tiene un historial negativo en la tramitación de ayudas europeas. En el [último marco financiero plurianual](#), España certificó hasta diciembre de 2019 alrededor de un tercio de los fondos disponibles. Repetir una cifra de ejecución semejante sería dramático para la situación de postpandemia.

De hecho, desde Bruselas algunas fuentes creen que la Comisión puso sobre la mesa una cuota tan grande de dinero porque cree que España no va a poder ejecutarla en su totalidad. “**En Europa se comenta que nos han dado 140.000 millones porque saben que no vamos a ejecutar todos los fondos**”, afirman.

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20201204/autonomias-ayuntamientos-liderar-proyectos-publico-privados-financiados-ue/540697445_0.html

Autonomías y ayuntamientos podrán liderar proyectos público-privados financiados con fondos de la UE

Los conocidos como PERTE tendrán que ser aprobados por el Consejo de Ministros una vez planteados y presentados.

Eduardo Ortega Socorro

Las comunidades autónomas y los municipios tendrán mucho que decir en el manejo de los fondos europeos. [No solo gestionarán una parte](#), sino que podrán hacer uso de la nueva fórmula con la que contarán las Administraciones públicas para fomentar la colaboración público-privada: **los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE)**.

[Según el real decreto ley que está preparando Moncloa](#) para reformular la Administración Pública y facilitar y acelerar la gestión de las ayudas europeas, los ejecutivos regionales y los ayuntamientos, así como los cabildos en donde corresponda, **podrán recurrir a esta figura sin tener que pasar por un permiso previo del Estado**.

Es decir, que entidades autonómicas y locales podrán abanderar los PERTE, que, con todo, **seguirán teniéndose que aprobar por el Consejo de Ministros** para llevarse a la práctica.

Cabe recordar que los proyectos reconocidos como PERTE son aquellos de “**carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico**, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la **colaboración público-privada** por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”.

Según ha podido saber Invertia, que las autonomías y los ayuntamientos puedan liderar este tipo de proyectos responde a la **necesidad de que los fondos europeos también sirvan para cubrir las necesidades más locales**.

Por ejemplo, procesos de rehabilitación de barrios y manzanas de ciudades, así como determinados proyectos de ingeniería en parajes urbanos o naturales.

Así lo indica el texto que está ultimando Moncloa. Este periódico ha tenido acceso a un borrador que todavía no es definitivo y en el que se indica que, entre otras ventajas, los PERTE contarán con **anticipos de fondos públicos que podrán ser hasta del 90%**, a no ser que los convenios que se firmen digan otra cosa.

Agencias estatales

El borrador en el que está trabajando el Gobierno **plantea la ‘resurrección’ de las agencias estatales para facilitar y acelerar los fondos europeos**. Cabe recordar que se decidió suprimir esta figura en 2015, que amparaba a órganos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Sin embargo, en el borrador Moncloa objeta que “la experiencia de los últimos años ha mostrado la **dificultad que ha implicado reconducir** el modelo organizativo de las agencias hacia otros organismos públicos, hasta el punto de que siguen existiendo agencias estatales a pesar de su falta de previsión en un instrumento legal”.

De esta manera, habilitar su ‘resurrección’ permitiría “reintroducir en la administración pública **una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión**, que cuenta con mecanismos de control de la eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por resultados. Un modelo que cuenta con un enfoque organizativo y funcional y con una filosofía subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente hayan sido fijados de forma concreta y evaluable”.

De hecho, el propio RDL remarca que la característica de **rendición de cuentas** que tienen estos órganos y que tanto parecen agradar en Moncloa.

Comisión ‘desaparecida’

El borrador ya ha sufrido cambios respecto a sus primeras versiones. En ellas figuraba una **comisión interministerial** destinada a la gestión de los fondos y la aprobación de proyectos.

Sin embargo, en ella no estaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos [reclamó su sitio en este importante órgano](#) que, a la postre, tomaría la decisión última sobre los 140.000 millones que Gobierno recibirá de Bruselas en los próximos años.

Su ‘rabieta’ tuvo resultado. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decidió suprimir esta comisión y que todas decisiones relativas a los fondos se discutan en el Consejo de Ministros.